

PERIODO 120°



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

---

**29<sup>a</sup> REUNION – SESION ESPECIAL**  
**23 DE OCTUBRE DE 2002**

---

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor JUAN CARLOS MAQUEDA**

Secretarios:

**Señor JUAN C. OYARZUN y señor JORGE HORACIO AMARFIL**

Prosecretarios:

**Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES**



## PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.  
 AVELÍN, Nancy B.  
 BAGLINI, Raúl E.  
 BAR, Graciela Y.  
 BUSTI, Jorge P.  
 CAFIERO, Antonio F.  
 CAPARRÓS, Mabel L.  
 CAPITANICH, Jorge M.  
 CASTRO, María E.  
 CHIAPPE, Lázaro A.  
 COLAZO, Mario J.  
 COLOMBO, María T.  
 CURLETTI, Mirian B.  
 DANIELE, Mario D.  
 FALCÓ, Luis  
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.  
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
 GALLIA, Sergio A.  
 GIOJA, José L.  
 GÓMEZ DE BERTONE, Deolide C.  
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo  
 GUINLE, Marcelo A. H.  
 HALAK, Beatriz S.  
 ISIDORI, Amanda M.  
 JENEFES, Guillermo R.  
 LAMBERTO, Oscar S.  
 LATORRE, Roxana I.  
 LEZCANO, Marcela F.  
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.  
 LOSADA, Mario A.  
 MAESTRO, Carlos  
 MAQUEDA, Juan C.  
 MARTÍ, Rubén A.  
 MARTÍN, Floriana N.  
 MAZA, Ada M.  
 MENEM, Eduardo

MERA, Mario R.  
 MORALES, Gerardo R.  
 MORO, Eduardo A.  
 MÜLLER, Mabel H.  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.  
 OCHOA, Raúl E.  
 OVIEDO, Mercedes M.  
 PARDAL, Jorge A.  
 PARDO, Ángel F.  
 PASSO, Juan C.  
 PAZ, Elba A.  
 PERCEVAL, María C.  
 PICHETTO, Miguel A.  
 PRADES, Carlos A.  
 RASO, Marta E.  
 SALVATORI, Pedro  
 SAPAG, Luz M.  
 SEGUÍ, Malvina M.  
 TAFFAREL, Ricardo C.  
 TERRAGNO, Rodolfo  
 USANDIZAGA, Horacio D.  
 VERNA, Carlos A.  
 WALTER, Pablo H.  
 YOMA, Jorge R.  
 ZAVALÍA, José L.

## AUSENTES:

ALPEROVICH, José J.  
 ARANCIO, Lyliá M.  
 BARRIONUEVO, José L.  
 BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.  
 CONTI, Diana  
 ESCUDERO, Sonia M.  
 MAYANS, Miguel A.  
 PUERTA, Federico R.

CON LICENCIA POR MATERNIDAD:

IBARRA, Vilma L.

## SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 6750.)
2. **Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.** (Pág. 6751.)
3. **Incorporación en el Diario de Sesiones de la nota suscrita por varios señores senadores y el respectivo decreto dictado por la Presidencia citando a sesión pública especial.** (DPP.-81/02). (Pág. 6751.)
4. **Consideración del proyecto de ley en revisión sobre derogación de regímenes jubilatorios especiales (C.D.-70/02).** Se aprueba. (Pág. 6751.)
5. **Apéndice:**

- I. **Sanción del Honorable Senado.** (Pág. 6776.)
- II. **Inserciones.** (Pág. 6776.)

—En Buenos Aires, a las 15 y 55 del miércoles 23 de octubre de 2002:

## 1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Se encuentran en la casa 57 senadores.

Por lo tanto, invito a los señores secretarios de bloque para que realicen las gestiones pertinentes a fin de que los señores senadores concurren al recinto, ya que hemos excedido en una hora el comienzo de la sesión.

—Así se hace.

—A las 16 y 4:

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Invito nuevamente a los colaboradores de los bloques a que

realicen las gestiones necesarias para que los señores senadores concurren al recinto.

—Así se hace.

—A las 16 y 13.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Habiendo quórum, queda abierta la sesión pública especial.

## 2

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Invito a la señora senadora por La Pampa, Deolide Carmen Gómez de Bertone a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora Gómez de Bertone procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

## 3

### NOTA Y DECRETO DE CITACION A SESION ESPECIAL

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Se incorporarán en el Diario de Sesiones la nota suscrita por varios señores senadores y el respectivo decreto dictado por la Presidencia citando a esta sesión pública especial.

—Los textos son los siguientes:

Buenos Aires, 16 de octubre de 2002.

*Al señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación.*

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente provisional, a efectos de solicitarle quiera tener a bien convocar a sesión pública especial para el día miércoles 23 del corriente, a las 14 horas, con el objeto de considerar en particular el proyecto de ley en revisión sobre derogación de regímenes jubilatorios especiales (C.D.-70/02).

Saludamos a usted muy atentamente.

*José L. Gioja. — Marcelo E. López Arias.  
— Mabel H. Müller.*

Buenos Aires, 16 de octubre de 2002.

VISTO la solicitud formulada por varios señores senadores, para que se convoque a sesión pública especial, con el objeto de considerar en particular la sanción de la Honorable Cámara de Diputados que deroga regímenes jubilatorios especiales, y

### CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia.

Por ello:

*El presidente provisional del Honorable Senado de la Nación*

### DECRETA:

Artículo 1º — Por Secretaría citese a los señores senadores a sesión pública especial para el día miércoles 13 del corriente, a las 14 horas, con el objeto de considerar en particular el proyecto de ley en revisión sobre derogación de regímenes especiales jubilatorios (expediente C.D.-70/02).

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3º — Comuníquese.

## 4

### DEROGACION DE REGIMENES JUBILATORIOS ESPECIALES

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Por Secretaría se enunciará el tema motivo de la convocatoria.

**Sr. Secretario (Oyarzún).** — Expediente C.D. 70/02. Proyecto de ley en revisión sobre derogación de regímenes jubilatorios especiales.

—El texto es el siguiente:

Buenos Aires, 21 de agosto de 2002.

*Al señor presidente del Honorable Senado.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º — Deróganse las leyes 22.731, 24.018 y 21.540.

Art. 2º — El personal comprendido en las leyes derogadas por el artículo 1º que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tuviere reunidos la totalidad de los requisitos que aquéllas establecen, mantendrá el derecho a los beneficios que las mismas otorgan, el cual podrá ejercer en cualquier momento, a partir de la fecha de cese en sus funciones o cargos.

Quedan taxativamente excluidos de este derecho el presidente y vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procurador general de la Nación, procurador general del Tesoro, los senadores y diputados nacionales, ministros y secretarios de Estado, subsecretarios, los secretarios y prosecretarios nombrados a

pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, el jefe de Gobierno, los legisladores, secretarios y subsecretarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 3º – A los afiliados comprendidos en los regímenes derogados por el artículo 1º de la presente ley les resultan aplicables las previsiones de la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 4º – En el marco de la emergencia económica financiera dispuesta por la ley 25.344, ampliada por el inciso 2º del artículo 1º de la ley 25.561 y por el plazo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley; los beneficiarios de los regímenes, derogados por el artículo 1º de la presente; por el artículo 11 de la ley 23.966; y de los regímenes provinciales y municipales transferidos a la Nación que percibieren haberes superiores a pesos tres mil cien (\$ 3.100) tendrán un haber máximo de pesos tres mil cien (\$ 3.100) netos, por todo concepto o el equivalente a treinta y ocho con setenta y cinco (38,75) MOPRE.

El Poder Ejecutivo podrá prorrogar el plazo establecido precedentemente mientras rija la emergencia decretada oportunamente.

Art. 5º – La Administración Nacional de la Seguridad Social, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley efectuará la revisión dispuesta por el segundo párrafo del artículo 15 de la ley 24.241 de los beneficios otorgados en virtud de las leyes derogadas en el artículo 1º de la presente, por el artículo 11 de la ley 23.966, así como el de los regímenes provinciales y municipales transferidos a la Nación.

En el caso que se detecten irregularidades en el otorgamiento de las prestaciones sujetas a la revisión precedentemente dispuesta, se procederá a la baja del beneficio, observándose a tales efectos el procedimiento establecido por la ley 19.549, sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas.

Art. 6º – Durante el plazo de un (1) año la Administración Nacional de la Seguridad Social deberá elevar un informe bimestral a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del que surja el resultado de auditoría que se practique en virtud de lo dispuesto por el artículo precedente.

Art. 7º – La percepción de un haber jubilatorio obtenido en virtud de las leyes derogadas por la presente ley, por el artículo 11 de la ley 23.966, así como el de los regímenes provinciales y municipales transferidos a la Nación, será incompatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, en la función pública nacional, provincial, municipal, o privada, para aquellos que perciban haberes superiores a doce con cinco (12,5) MOPRE.

Art. 8º – La presente ley es de orden público y comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO O. CAMAÑO.

*Eduardo D. Rollano.*

**Sr. Presidente (Maqueda).** – En consideración en particular.

–Se enuncia el artículo 1º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: planteo una modificación al artículo 1º, con el siguiente texto: Derógase a partir del 1º día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de la República Argentina los artículos 1º y 19 a 25 de la ley 24.018 y la ley 21.540.

Quiero clarificar en qué consiste la propuesta que estamos formulando...

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Perdóneme, senador, que lo interrumpa.

Se acordó en labor parlamentaria –la verdad es que no haría falta un acuerdo– ser estrictos con respecto al tiempo de las intervenciones en el tratamiento en particular, y que no se repitan los discursos realizados en la consideración en general.

**Sr. Pichetto.** – Voy a ser breve, señor presidente, limitándome a plantear claramente...

**Sr. Presidente (Maqueda).** – No es para usted. Lo digo para todos los señores senadores.

**Sr. Pichetto.** – .... que la derogación de estas normas, dando respuesta adecuada al reclamo de la sociedad, apunta a eliminar los privilegios, puntualmente, del sector político.

En efecto, estamos derogando el artículo 1º de la ley 24.108, que establece el régimen de asignaciones mensuales vitalicias para el presidente, vicepresidente y jueces de la Corte. Además, estamos derogando los artículos 19 al 25 de la misma ley, que se refieren a las jubilaciones políticas de legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional, representantes de lo que era el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, el intendente. En fin, todo lo referido a

jubilaciones políticas quedaría derogado con este texto que propongo.

Además, propongo que se ratifique la derogación que hizo la Cámara de Diputados de la ley 21.540, referida a las pensiones asistenciales de los obispos.

Esta es la propuesta que estamos haciendo con relación al artículo 1º en consideración.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: en el caso de que la Cámara vote favorablemente la propuesta del senador Pichetto, voy a proponer un nuevo artículo 2º –lo planteo ahora porque está vinculado con la resolución de la Cámara respecto del artículo 1º– que establezca la modificación del régimen jubilatorio de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y miembros del Ministerio Público, llevando la edad jubilatoria, que actualmente es de 60 años, a 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres; y modificar los años de servicio, que actualmente son 20 años, para llevarlos a 30 años de servicio con aportes. De esta forma se equiparan los requisitos que establece la ley 24.018 para magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial con los requisitos de la jubilación ordinaria en lo que hace a la edad –65 y 60 años, para hombres y mujeres, respectivamente– y los aportes, estableciendo 30 años de servicios...

**Sr. Presidente (Maqueda).** – El senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

**Sr. Yoma.** – Cómo no.

**Sr. Pichetto.** – Simplemente quiero clarificar que nuestra propuesta excluía de la derogación el sistema jubilatorio especial de los magistrados y de Cancillería, que son sistemas de carrera.

Además, solicito que la votación de este artículo se haga de manera nominal para que quede claro el voto de cada uno de los senadores.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Continúa en el uso de la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Entonces, se mantiene el régimen especial para los miembros del Poder Judicial y se elimina lo que podrían constituir condiciones de privilegio con respecto a las jubilaciones ordinarias, que tiene que ver con

años de edad y de aportes. No sé si quedó clara la propuesta que voy a hacer en el caso de que la Cámara resuelva modificar el artículo 1º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Les pido a los dos señores senadores –tanto Pichetto como Yoma– que nos hagan llegar una copia de sus propuestas a Secretaría, porque las vamos a leer en el momento de ser votadas.

Tiene la palabra el señor senador Busti.

**Sr. Busti.** – Señor presidente: como fui miembro informante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, propongo el mantenimiento, tal como vino de la Cámara de Diputados, del artículo 1º. Es decir, que diga: Deróganse las leyes 22.731, del Servicio Exterior, 24.018, de magistrados, funcionarios judiciales, funcionarios públicos, presidente y vicepresidente de la Nación, y la ley 21.540, de dignatarios eclesiásticos. O sea que se mantiene exactamente el texto que vino de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

**Sr. Cafiero.** – Señor presidente: solicito que se excluya de este artículo la mención a la ley 21.540, porque se está introduciendo un elemento de gran confusión al tratar de equiparar las jubilaciones especiales o de privilegio con las asignaciones que por invalidez o por haber cumplido 75 años reciben los obispos, arzobispos y otros miembros del personal eclesiástico.

Esta cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados; no tenía despacho de comisión ni provenía del proyecto general que trataba sobre la materia que estamos discutiendo.

Para mayor abundamiento, quiero decir que este es un típico aporte al sostenimiento del culto católico; no es nada referido ni al ejercicio ni al trabajo de los involucrados en esta ley. Cuando discutamos una ley de culto o el presupuesto nacional, allí sí deberíamos decidir si se deja o no esta asignación que –vuelvo a insistir– se otorga a los obispos y arzobispos que han cumplido 75 años de edad, diez años más que la fijada para las jubilaciones ordinarias, o que resistan estado de invalidez.

Según los datos que he conseguido, esta asignación le significa al erario nacional una prestación mensual de 28.800 pesos, porque son 2.400 pesos y 12 personas las involucradas en este régimen. No podemos tapar el cielo con un harnero, señor presidente. Esto tiene –y lo digo con todo respeto por los señores diputados que lo

propusieron— un contenido más ideológico que jurídico o de significación real para todo el sistema jubilatorio.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Passo.

**Sr. Passo.** — Señor presidente: de la misma forma en que lo expresé durante el debate en general —fundamentos que no voy a reiterar— solicito que el cuerpo vote el artículo 1º tal cual vino de la Cámara de Diputados, porque a mi entender es la única forma que este cuerpo elimine privilegios injustos en el sistema previsional argentino.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** — Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico Jujeño también ratificamos nuestra posición y, en particular, con relación al artículo 1º, mantenemos el espíritu del proyecto de ley que ha venido de Diputados sostenemos la derogación de las leyes 22.731, 24.018 y 21.540.

También quiero advertir que hay que tener en cuenta que la modificación que el senador Pichetto acaba de hacer en su moción va a tener efectos en el artículo 4º, que establece un tope de 3.100 pesos y que nos parece justo. También nos parece justo derogar las jubilaciones de privilegio —no especiales—.

Nosotros entendemos que los tres regímenes de los que estamos hablando —y que queremos derogar— son de privilegio. Y si se acoge la propuesta que ha hecho el senador Pichetto, el artículo 4º se va a modificar sustancialmente, porque el tope de 3.100 pesos está referido a la derogación del artículo 1º.

Queremos ser coherentes con este criterio de derogar las jubilaciones de privilegio y que el tope sea también para cualquier hijo de vecino. Porque está vigente el tope de la ley de solidaridad previsional 24.463, que se aplica a todos los argentinos que están en el marco de la ley 24.241, es decir, del régimen general. Y creemos que tiene que ser aplicado a todos los argentinos, no importa cuál sea su condición.

Queremos advertir —insisto— que esta modificación propuesta va a tener también incidencia en la cuestión del tope.

Por otro lado, quiero recordar brevemente —haciendo uso del tiempo que me toca— que en el caso de la provincia de Jujuy, cuando se hace la transferencia del sistema previsional —que no

fue compartido en su momento pero que se ha concretado por el voto mayoritario del justicialismo— se ha transferido el sistema previsional provincial a la Nación y se ha puesto a todos los agentes de la administración pública provincial en el marco de la 24.241, inclusive a los jueces. No se ha hecho ningún tipo de salvedad con relación a los jueces de la provincia de Jujuy, es decir que no están encuadrados en la ley 24.018 sino en el marco de la 24.241.

En este sentido, creo que es una cuestión de estricta justicia que si los jueces de la provincia de Jujuy están en el marco de la ley 24.241, como cualquier argentino, como cualquier hijo de vecino, también lo esté el resto de los jueces federales y el personal del Servicio Exterior.

En cuanto a este personal, y también con respecto a los que pertenecemos a la política y ejercemos cargos de senadores, legisladores, presidente de la Nación o funcionarios nacionales, se argumenta que se está haciendo un aporte importante y que el haber jubilatorio debe tener una relación directa con lo aportado. Considero que eso no tiene nada que ver y que se da de patadas con la cuestión solidaria que debe tener un régimen previsional.

Por eso nos parece que hay que afianzar la derogación que ha votado Diputados y esperamos que el pleno de este cuerpo acompañe la decisión de esa Cámara, derogando lisa y llanamente estas leyes que hemos planteado en el artículo 1º y también estableciendo el tope que plantea el artículo 4º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el senador López Arias.

**Sr. López Arias.** — Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve. Yo tengo una pública posición en el sentido de tratar de eliminar todo lo que signifique o tenga características de privilegios dentro de este sistema. Pero aclaro que, en realidad, estamos hablando de regímenes especiales más que de privilegiados.

Algunos aspectos, como el tema de la edad o de la cantidad de aportes —como decía el senador Yoma—, cualquiera sea la posición que tengamos, tienen que ser derogados para equipararlos y tenerlos en igualdad de condiciones en todos sectores de la sociedad.

Estoy de acuerdo también —y esto no tiene nada que ver con la discusión del artículo 1º— en que por un plazo determinado y mientras dure la emergencia pueden ponerse topes a las jubi-

laciones. Creo que esto es algo que la gran mayoría de este cuerpo no lo discute.

Pero con estas salvedades, sí estoy absolutamente convencido de que si votamos esta ley como viene de Diputados, vamos a lograr la tacha de inconstitucionalidad en conjunto de la norma; o sea que en vez de lograr un avance vamos a terminar retrocediendo, por una razón muy simple: hay sectores que están haciendo un aporte especial, y en esto creo que se equivoca el senador Morales —o el senador Passo; no sé cuál de los dos mencionó este tema—. Porque no sólo estuvieron aportando lo que correspondía por los puntos porcentuales, sino por arriba de estos, justamente para tener un mayor derecho a un beneficio mejor el día que se jubilen. Ignorar esto y equipararlos totalmente a los que están en una situación jurídica distinta, evidentemente va a lograr la tacha de inconstitucionalidad del conjunto de la ley.

Esto puede salvarse con una modificación como la que propone el senador Pichetto y yo estoy dispuesto a acompañarlo.

Pero hago la aclaración de que si se ratificara el artículo 1º como viene de Diputados, voy a proponer un agregado como nuevo artículo 3º, para resguardar los derechos adquiridos de aquellos que, por haber venido haciendo un aporte especial, han adquirido también un derecho especial. Y esto no tiene nada que ver con la solidaridad sino con la expectativa de derechos que han quedado firmes a partir de haberse cumplido actos que han significado un verdadero sacrificio patrimonial de los aportantes.

Hecha esta salvedad, señor presidente, voy a acompañar la propuesta de modificación del artículo 1º. Si se mantuviera tal como viene de Diputados, voy a proponer este nuevo artículo 3º, al que en su momento daría lectura para que podamos ponerlo a consideración del cuerpo.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el senador Gómez Díez.

**Sr. Gómez Díez.** — Señor presidente: en el caso del artículo 1º votaré a favor de la sanción de la Cámara de Diputados. Creo que hay que mandar un mensaje muy fuerte y muy concreto de derogación de los regímenes especiales: es lo que pide la sociedad. Esto ha sido tratado en la Mesa del Diálogo Argentino. Es el proyecto de ley que envió el presidente de la Nación y en

toda la República se han levantado firmas de numerosos ciudadanos argentinos a favor de esta derogación.

No tiene que quedar duda alguna de que no habrá más regímenes de privilegio en la Argentina. Lo que sí pienso, y por eso lo he puesto en el dictamen en minoría, es que en el caso de los jueces y del personal del Servicio Exterior es necesario dar un nuevo debate de cara a la sociedad acerca de los tratamientos diferenciados. Pero en este sentido lo que propongo es que el Poder Ejecutivo nacional, en el término de sesenta días, envíe a este Congreso un proyecto de ley sobre esta cuestión; que debatamos el tema de cara a la sociedad, explicando cuáles son las razones de la diferenciación y cómo se financian estos regímenes especiales. Creo que esto es lo lógico y lo coherente en esta situación difícil que vive el país, en la cual hay una demanda muy fuerte de solidaridad y de reducción de los espacios especiales.

En el caso de la Justicia propongo que ese proyecto que mande el Poder Ejecutivo contemple la misma edad y los años de servicio del régimen general y que se especifique cómo se financia la diferencia en el caso del haber. Me permito señalar que el tema judicial tiene, además, un conjunto de complejidades que hay que analizar y debemos buscarle una solución.

Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 99 en su apartado 4º, el que establece que cesan en sus funciones aquellos magistrados que cumplen la edad de 75 años. Esto...

—Murmullos en la sala.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Perdón, senador.

Por favor, silencio.

Continué, señor senador.

**Sr. Gómez Díez.** — Esto determina que existan hoy magistrados de edad avanzada que no se acogen a la jubilación ni tampoco pueden cesar en sus funciones por imperio de esta declaración de nulidad que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este momento, en la Capital Federal hay jueces de 82 años de edad internados en geriátricos —hay casos concretos de esta naturaleza—, lo que configura una cuestión sobre la cual hay que legislar y buscar una solución. Por eso creo que es importante un debate de esta

naturaleza acerca de un régimen previsional para el caso de los magistrados.

Creo también que al considerarse esta cuestión nosotros, que representamos a las provincias como senadores de la Nación, también tenemos que poner sobre la mesa el hecho de que si existe un tratamiento diferenciado para la función judicial, también en las provincias tenemos jueces. No hay razón alguna para que, por ejemplo, un juez nacional en lo Civil de la Capital Federal tenga un tratamiento diferenciado con respecto al de un juez civil de cualquiera de nuestras provincias, porque, en definitiva, la función que cumplen es exactamente la misma.

Y en el caso del Servicio Exterior de la Nación, también creo que hay que producir un debate de esta naturaleza, de cara a la sociedad y referido a un régimen nuevo.

Pero esta tarde no deben quedar dudas de que este Congreso deroga los regímenes especiales de jubilación de la Argentina.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

**Sra. Fernández de Kirchner.** — Señor presidente: apoyo la posición del señor miembro informante en el sentido de mantener la derogación prevista por la sanción de la Cámara de Diputados en su artículo 1º, a fin de que las leyes 22.731, 24.018 y 21.540 resulten derogadas.

Los fundamentos respectivos fueron claramente expuestos durante el tratamiento en general de este proyecto, en el que anticipé nuestra voluntad de respetar el texto sancionado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, y dadas las características de la norma, resulta casi obvia nuestra posición con relación al artículo 1º, que constituye —junto con el tope previsional de 3.100 pesos— el nudo estructural de la sanción de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, reitero mi apoyo al texto del artículo 1º sancionado por la Cámara baja.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** — Señor presidente: adelanto mi voto en igual sentido al efectuado por la Cámara de Diputados, aunque no comparto totalmente el proyecto.

En primer lugar, no estoy de acuerdo con los augurios de inconstitucionalidad realizados. El maestro Orgaz ya hablaba de que cuando había una emergencia, su declaración y la evaluación

del estado de emergencia son competencia absoluta de los poderes de gobierno —Ejecutivo y Legislativo—; es decir que se trata de algo ajeno al Poder Judicial. Esto ha sido mencionado en reiteradas oportunidades en este recinto.

Por otra parte, también me gustaría modificar y perfeccionar sobre todo el artículo 7º en lo que respecta a la prohibición de realizar actividades privadas. Pero entiendo que hoy la República no admite más que continúen en vigencia estos regímenes y estas desigualdades, más allá de las arduas y antiéticas defensas corporativas que hemos tenido que escuchar por parte de personas que han venido a defender aquí sus prebendas y que consideran a estos regímenes una suerte de cotos privados, ignorando los millones de hermanos que se están muriendo de hambre y viviendo por debajo de la línea de pobreza.

Por lo tanto, adelanto mi voto afirmativo a favor del texto que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.

**Sr. Salvatori.** — Señor presidente: se ha hablado mucho de las jubilaciones de privilegio, pero creo que es necesario señalar que se comete un error al respecto, porque lo que estamos considerando son regímenes especiales que han sido establecidos por ley.

Voy a votar afirmativamente el artículo 1º sancionado por la Cámara de Diputados, pero adhiriendo a la propuesta del señor senador Pichetto, con la reforma propuesta por el señor senador Yoma, ya que se deben excluir —a mi juicio— a los diplomáticos de carrera y a los magistrados del Poder Judicial.

Es que si se derogaran lisa y llanamente estos regímenes especiales, se estarían desconociendo derechos adquiridos y se estarían violando las protecciones que prevé y consagra nuestra Constitución Nacional. No se trata de privilegios, sino de regímenes especiales, en razón de la particular actividad que desempeñan esos sectores. En ese sentido, se deben respetar los principios de independencia de los poderes y de intangibilidad de los salarios, consagrados con raigambre constitucional.

Hemos sido sometidos a una tremenda presión mediática con relación a este tema, pero tenemos que tener en cuenta, al margen de la razonabilidad del régimen especial en cuestión,



que en la mayoría de los casos hay quienes superan los años correspondientes de aportes y se encuentran cercanos a acceder a la jubilación, tanto jueces como diplomáticos.

Estoy convencido de derogar la totalidad de las jubilaciones que si son de privilegio, como la de los funcionarios políticos.

Pero considero que la derogación de estos regímenes especiales, traería aparejada para el erario público peores problemas que los que se pretenden solucionar, ya que las costas de los juicios —que seguramente se van a perder— nos someterán a exacciones de las que el Estado deberá hacerse responsable. Además, corremos el riesgo de que toda la ley sea tachada de inconstitucional.

Por todo lo expuesto, pensamos que es preferible apartarnos de los extremos, transitar por el camino amplio del centro, asumir nuestro rol en plenitud, velar por los intereses nacionales —que tenemos la obligación de defender— y estudiar una ley correctiva y progresiva para los magistrados y funcionarios de carrera de la Cancillería, a los efectos de derogar sólo las llamadas jubilaciones políticas.

Adhiero también a la propuesta que se ha formulado, en el sentido de que hace falta una reforma integral del régimen previsional argentino.

La Secretaría de Seguridad Social de la Nación deberá elaborar un proyecto que contemple todas estas circunstancias que han determinado este análisis que estamos formulando, en donde entran —por supuesto— los requisitos de la edad y los años de servicio para igualar el régimen general.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

**Sra. Avelín.** — Señor presidente: en primer lugar, mantengo lo expresado en el tratamiento en general respecto de apoyar la derogación de todos estos regímenes especiales, y de ratificar el proyecto del cual soy autora, identificado con el número de expediente S.-217/02.

Hay que ser absolutamente claro. El Senado va a tener la oportunidad de aprobar la derogación —lisa y llana— plasmada en la sanción de Diputados, que involucra al régimen de jubilaciones y pensiones para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación establecido por la ley 22.731.

En segundo término, se podrá derogar la ley 24.018, que involucra al régimen extraordinario para magistrados, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación, de la Fiscalía Nacional, y a los legisladores nacionales, ministros, secretarios del Poder Ejecutivo y demás. O podremos modificar la sanción de Diputados, como estamos advirtiendo que sería la intención del bloque justicialista.

En caso de modificarse la sanción de la Cámara de Diputados, evidentemente hoy no podríamos dar aprobación definitiva a la ley, y tendría que volver a aquella.

Respetando absolutamente las posiciones de los distintos señores senadores, considero que el artículo 1º debe aprobarse tal como viene de Diputados, pues a través de él se propicia la derogación de las leyes 22.731, 24.018 y 21.540.

Además, voy a seguir sosteniendo que estos regímenes especiales si constituyen un privilegio, ya que se exige menos edad —cinco años menos—, y menos años de aportes —se necesitan veinte años—, cuando en el régimen común se exigen treinta.

En consecuencia, considero que si son regímenes de privilegio, como comúnmente los denomina nuestra sociedad.

En tercer lugar, se ha hablado de la posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad. En ese sentido, ratifico lo que planteé en la consideración en general; no existe ninguna inconstitucionalidad, toda vez que la ley aplicable —y lo dice la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos— es la vigente al momento del cese del servicio. De modo tal que queda desvirtuada toda posibilidad de declaración de inconstitucionalidad desde ese aspecto.

Para finalizar, resulta ser que para derogar regímenes especiales o de privilegio, que exigen veinte años de aportes, o como sucede en el caso de un miembro de la Corte de Justicia, que con sólo cuatro años de ejercicio y tan solo un requisito, que puede ser la edad o los veinte años de aporte, queda configurado el derecho para poder jubilarse bajo estos regímenes.

Creo, señor presidente, que está más que demostrado que no podemos hablar de derechos adquiridos solamente cuando se trata de derogar regímenes jubilatorios de privilegio. Los derechos adquiridos son de los jubilados y pensionados de nuestro país, que hoy siguen teniendo

el recorte del 13 por ciento, que se jubilaron con un régimen común, con 65 años de edad, con treinta años de aporte y treinta años de servicio.

En ese sentido, la Corte también ha manifestado, en distintos fallos, que los derechos adquiridos concretamente se refieren a que se respete la situación de jubilado, y no a que su haber siga siendo determinado por las mismas reglas vigentes al tiempo de concederse el beneficio. Son fallos de la Corte, señor presidente, por lo cual ratifico mi apoyo al artículo 1º, tal cual viene de Diputados, a fin de que esto pueda tener sanción definitiva hoy.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra la senadora Seguí.

**Sra. Seguí.** — Señor presidente: pienso que este asunto merece una consideración política, en la que no me parece que se haya profundizado.

Creo en la buena fe y en la buena disposición de los señores senadores que han dado sus fundamentos para votar el proyecto, tal como viene de Diputados. Pero no he escuchado a lo largo del tratamiento de este asunto —ni en comisiones ni en este recinto— que se hayan tenido en cuenta los regímenes especiales como tales.

Pienso que tenemos que hacer el siguiente ejercicio: ¿por qué se han excluido de este tratamiento, por ejemplo, los retiros de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad? Se las ha excluido, evidentemente, porque esos retiros han sido dispuestos en función del servicio que queremos tener. Un coronel no puede tener 60 años de edad, entre otras cosas porque tiene a su cargo la conducción de tropas. Un sargento no puede tener 50 años de edad, entre otras cosas porque seguramente, en el ejercicio de su función, quizá deba perseguir delincuentes.

No he escuchado y no he visto que hayamos ahondado en el régimen especial que corresponde al Poder Judicial que queremos tener, ni que hayamos profundizado acerca del régimen especial que corresponde al Servicio Exterior de la Nación que queremos tener. No me parece que esto sea un asunto del cual hoy podamos prescindir por más que haya, en la Argentina, razones fiscales que nos tengan a todos dispuestos a conformar una nueva estructura del Estado, con distintas asignaciones presupuestarias para cada sector.

Creo que hay que traer al debate dos cuestiones que son claves. El país va a enfrentar, en los próximos meses, discusiones en torno de dos grandes sectores económicos. Esas discusiones van a girar alrededor del tamaño del negocio financiero en la Argentina. Esas discusiones van a girar en derredor de los derechos que les corresponden a las empresas privatizadas, en función de las antigüedades y de las condiciones que ya ha habido en la vida y en el avatar de sus respectivos contratos.

Me parece que hay que preguntarse si las instituciones de la República y los poderes del Estado van a estar en condiciones y si los estamos diseñando para resistir los *lobbies* y las presiones empresarias, que son evidentes; algunas de las cuales estamos tomando en cuenta en este mismo Senado en los últimos días.

Me atrevo a decir que hay que pensar seriamente sobre cuál es el diseño de los poderes que queremos tener. Y también me atrevo a afirmar que hay algunos interesados en arrodillar a las instituciones de la República, aún más de lo que están. Entonces, en función de esa convicción política que tengo, que las instituciones deben estar en condiciones de resistir esos *lobbies*, esos intereses empresarios que entre otras cosas se manifiestan a través de embajadores para terminar recurriendo el propio Estado a los tribunales de la República, me animo a decir que no es el momento oportuno para derogar un régimen sin reemplazarlo en esta misma sesión, en el caso de los magistrados y del Servicio Exterior de la Nación, por un régimen especial.

Si en esta sesión...

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Perdón, señora senadora, le ruego ir redondeando. Usted, quizá, no me escuchó. Estamos en el tratamiento en particular; solamente son cinco minutos.

**Sra. Seguí.** — Sí, señor presidente, los he escuchado a los demás senadores hacer aclaraciones de tipo general en este artículo que creo es el que tiene ese carácter. Y como no he tenido la oportunidad de hacerlo en la sesión anterior, lo hago ahora. Y termino con ello.

Yo hubiera votado un régimen especial para esos dos asuntos si así me lo hubieran propuesto en esta sesión. Entonces, como no ha sido así, adhiero a la propuesta de los senadores Pichetto y Yoma.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra la señora senadora Raso.

**Sra. Raso.** – Señor presidente: adelanto mi voto positivo al proyecto tal cual viene de Diputados, porque creo con convicción que si bien la política puede ser el arte de lo posible, lo posible debe ser correcto, y este proyecto es correcto por los tiempos en que vivimos. El estado de bienestar por el cual se establecieron estos regímenes que hoy tratamos de derogar ha desaparecido en la Argentina, y mantener estos privilegios tal cual están hoy en día sería vulnerar el más estricto sentido de justicia y equidad para los que menos tienen.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Chiappe.

**Sr. Chiappe.** – En la inteligencia de no confundir las jubilaciones especiales con las de privilegio y apuntando a la derogación, exclusivamente, de estas últimas, coincido totalmente con la moción que hiciera el senador Pichetto, pero creo que desliza un error que le sugiero corregir para poder apoyarla.

En la propuesta del senador Pichetto se menciona la derogación de los artículos 1º y 19 a 25 de la ley 24.018. Tendría que decir –porque creo que hay un error material– 1º a 6º y 19 a 25. Si quieren lo podríamos conversar en un breve cuarto intermedio, pero sería un dislate mantener vigentes los artículos 2º a 6º de la ley 24.018 si derogamos el 1º. Al derogar el 1º, necesariamente, deberemos derogar el 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Con esa aclaración, apoyo totalmente la moción del senador Pichetto.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Estaba analizando lo que dice el senador Chiappe, y tiene razón, porque están interrelacionados del 1º al 6º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Entonces, le pido que por favor haga llegar a Secretaría el texto definitivo.

**Sr. Pichetto.** – Todos se refieren al tema de las pensiones vitalicias para los presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

**Sr. Baglini.** – Señor presidente: en el debate en general hemos dejado sentado que había dos mecanismos posibles.

Uno de ellos, la derogación lisa y llana de todos los regímenes, con lo cual se entraba en colisión con clarísimas interpretaciones consti-

tucionales que ya están sentadas por la Corte Suprema respecto de regímenes de los magistrados, del Servicio Exterior de la Nación y de otros casos ya excluidos por la Cámara de Diputados como el caso de los investigadores científicos y tecnológicos y los docentes, casos que produjeron amplios fallos de la Corte Suprema.

El otro es la producción de una derogación seriada. Es decir, derogar, en primer término, la jubilación de los funcionarios políticos, entendiéndose por esto los cargos comprendidos en los artículos 19 a 25 de la ley 24.018, que comprende al Congreso y a los funcionarios de la administración ejecutiva.

En segundo término, la derogación del resto de los casos a través de un estudio serio que evite el ejemplo de la discusión que se acaba de registrar hace dos segundos sobre si es atinente o no derogar el artículo 1º y que evite aún más lo dicho en el debate en general; es decir, dejar más desequilibrado el sistema y que no tome en un plano horizontal la revisión de todos los aspectos que corresponden a la cuestión como los años de edad de jubilación para cada sexo, los años de aporte, qué aportes computan para la determinación del haber, cómo es el sistema de movilidad y cómo es la variación porcentual en los casos en que corresponde.

Cuando uno mira estos seis planos en un cuadro comparativo, que de paso solicitaré sea insertado en el Diario de Sesiones –el asunto ya fue explicado en el debate en general–, se da cuenta de que son los que conforman que un régimen sea especial o de privilegio –cualquiera sea la expresión que utilicemos– o general como el de la ley 24.241.

Reitero la expresión de que nosotros no somos especialistas en temas previsionales. En los temas de ese carácter, expresiones como una coma o un artículo han provocado largas disquisiciones judiciales.

De manera que la propuesta que voy a reiterar es la de condensar los artículos 1º, 2º y 5º del proyecto que he presentado en un solo artículo, de modo de ratificar la derogación de los artículos 19 a 25 de la ley 24.018 –funcionarios políticos– desde la fecha del decreto 78/94. A continuación, para el caso de que se interpretara que esto es insuficiente, producir la derogación a partir del primer día del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de esta ley y encomendar a la Secretaría de Seguridad Social que,

en el plazo de sesenta días corridos, presente un proyecto normativo por el que derogue todos los restantes regímenes jubilatorios instituidos por la 24.018, 22.731, 22.929 y las modificatorias 23.026, 23.626 y 24.016, y establezca un sistema de reconocimiento de los servicios con aportes prestados en los regímenes por las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la norma que se sancione, hayan prestado no menos del 60 por ciento de los servicios.

De esta forma se cubren tres aspectos. En primer lugar, se deroga ya y hoy el régimen de los funcionarios políticos para que no queden dudas de la vocación del Congreso en cuanto a avanzar en la derogación de las jubilaciones de privilegio.

En segundo lugar, se somete a un estudio por parte de especialistas los seis o siete aspectos centrales que acabé de mencionar. Ese estudio debe ser profundo y en un plazo breve, como pueden ser los sesenta días también mencionados.

En tercer lugar, se ensambla el accionar con el del Poder Ejecutivo de la Nación, que acaba de dictar un decreto por el que se constituye una comisión para la revisión integral de la ley 24.241.

Finalmente, se evita la posibilidad de que, al excluir o al modificar aspectos parciales de un régimen por parte del artículo 1º del proyecto en consideración, se lo deje inmóvil en el tiempo, cuando es muy posible que para ensamblar ello con la reforma general del sistema previsional que el Poder Ejecutivo ha encomendado a esta comisión, haya que revisar simultáneamente algunos de los otros aspectos en los cuales aquí todavía no hemos puesto el foco y que no tienen que ver simplemente con la edad o las otras condiciones o características que fueron propuestas por los senadores Pichetto y Yoma.

Esto es sencillamente lo que proponemos y la razón por la cual no podemos apoyar el artículo 1º, ya que tenemos un mecanismo de derogación que es sustancialmente diferente y que apunta a evitar los conflictos y las interpretaciones judiciales. En una palabra, trata de impedir que legislemos por la emergencia —entre comillas—, resolviendo aspectos que son verdaderamente muy complejos sin tomar en consideración la totalidad de los asuntos que deben ser tenidos en cuenta.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: he pedido la palabra para expresar nuestra convicción en el sentido de que algunos de los regímenes a los que se refiere el artículo 1º —que estamos considerando—, pueden ser considerados de privilegio mientras que otros no.

En efecto, los regímenes de los jueces y de los magistrados así como los de los diplomáticos no son regímenes de privilegio sino especiales, por las razones que díramos en ocasión del debate en general del asunto. Y se trata de regímenes especiales por las características de las funciones que desempeñan y porque, en algunos casos, hay aportes superiores a los que efectúa el común de los jubilados. Por esta razón, bajo ningún punto de vista se puede considerar que se trata de regímenes de privilegio.

Además, vamos a ratificar que no nos queremos hacer responsables de las gravísimas consecuencias que traerán para el erario nacional los juicios que sobre la inconstitucionalidad de esta medida se van a promover, porque van a terminar con condenas en contra del Estado, ya que aquí se están vulnerando derechos adquiridos, tal como en su oportunidad ya lo señalara la jurisprudencia de nuestro país.

Sobre este tema, no quisiera recordar las demandas que tuvo que afrontar y pagar el Estado nacional en ocasión de derogaciones anteriores de regímenes previsionales, que no eran de privilegio sino especiales como a los que ahora estoy haciendo referencia.

Por otro lado, con esto quiero decir que adhiero al dictamen o a la propuesta del representante de la provincia de Río Negro senador Pichetto. También deseo señalar que en modo alguno esto implica que no se pueda establecer el límite de los 3.100 pesos contemplados en la sanción de la Cámara de Diputados, que fueran previstos con un límite temporal en razón de tratarse de una emergencia.

En este sentido, se ha indicado que en caso de emergencia se pueden limitar los montos de los haberes previsionales, pero de ninguna manera se puede cambiar todo el régimen jubilatorio, porque ello implicaría atentar contra los derechos adquiridos.

En virtud de lo expuesto, votaré afirmativamente por la propuesta formulada por el señor senador Pichetto, por la limitación a 3.100 pe-

sos por el término de un año y en contra de la incompatibilidad que se establece en el artículo 7º, en cuanto al ejercicio de la actividad privada por parte de los jubilados, por las razones expuestas ampliamente durante la consideración en general.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Prades.

**Sr. Prades.** – Señor presidente: en el tratamiento de este artículo resulta imposible no hablar de los conceptos generales de esta norma, porque se trata del artículo marco que la define integralmente.

Soy miembro del Consejo de la Magistratura y, tal vez, tenga discusiones y problemas por mi posición, pero no debemos perder de vista este momento que vive el país, en el cual todos hemos perdido algo.

Tengo entendido que existen dos millones de jubilados que ganan 200 pesos y, si bien reconozco que hay que igualar para arriba y que la jerarquización en la sociedad es importante para que exista la movilidad social necesaria e imprescindible –que jerarquice también a la sociedad–, creo que derogar este tipo de jubilaciones es una respuesta necesaria y esencial que debemos dar a la sociedad argentina, como una forma de demostrar que la crisis la sufrimos todos.

Sin perjuicio de ello, el 8 de octubre he presentado un proyecto, contenido en el expediente S.-2.587/02, por el que se propone una modificación clara y concreta al artículo 1º aprobado por la Cámara de Diputados. Dicha propuesta incorpora la irretroactividad de la derogación, para evitar precisamente que se puedan colar las demandas judiciales en contra del Estado, impidiendo de esta manera grandes erogaciones al erario público, lo que prácticamente ya es insostenible.

Y aclaro que la irretroactividad no tiene raigambre constitucional sino que es de carácter legal; y pertenece al derecho común privado, no al público. Por lo tanto, esto es totalmente viable y va a imposibilitar la litigiosidad y los gastos al erario público, que tanta preocupación nos causan.

En consecuencia, solicito que por Secretaría se dé lectura al artículo 1º propuesto, a fin de que todos los señores senadores tomen conocimiento.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Señor senador: solicito que haga llegar una copia del texto a la Presidencia.

**Sr. Prades.** – Si no hay inconveniente, lo puedo leer.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Cómo no, muy amable.

**Sr. Prades.** – *(Lee)* “Artículo 1º: Deróganse las leyes 24.018, 21.540 y toda otra disposición que establezca regímenes especiales distintos al establecido por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones creado por ley 24.241. Ratifícase con efecto retroactivo a la fecha indicada en el artículo 11 de la ley 23.966 la derogación de todos los regímenes jubilatorios o de retiros especiales y/o distintos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones relacionados en dicho artículo, fuere en cuanto a los plazos mínimos allí establecidos o a la movilidad de los haberes considerados.”

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Bar.

**Sra. Bar.** – Señor presidente: quiero adelantar mi voto favorable al proyecto de derogación de la ley tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados.

A su vez, deseo exponer dos breves ideas. En primer lugar, quiero poner en conocimiento de la Cámara que en un caso similar ocurrido en la provincia de Entre Ríos –cuando se declaró la emergencia económica durante el anterior gobierno– se produjo la disminución de los haberes de los pasivos; decisión que en la provincia fue atacada en su momento por inconstitucional.

El gobierno provincial apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual la declaró legal. Es decir que con esto estamos dando por sentado que no es inconstitucional el hecho de que en un período de emergencia puedan disminuirse los haberes de los pasivos.

En segundo término, desde el punto de vista social y político, creo que la comunidad en su conjunto está esperando que se dejen sin efecto ciertos privilegios, llámense jubilaciones de privilegio o sistemas especiales. Y aclaro que con esto no se trata de responder a un programa de televisión –como se dice en algunas reuniones– sino que considero que en estos momentos de dura crisis, en donde hay grandes sectores de la sociedad que no tienen trabajo, donde existe

desnutrición y donde cada vez es más incesante el reclamo por la entrega de planes de Jefas y Jefes de Hogar, un acto de solidaridad estableciendo un tope a la jubilaciones de mayores montos sería una medida de equidad frente a la grave crisis que vive el país.

Por eso considero un acto de justicia que se establezca el tope de los 3.100 pesos por un año y que, a su vez, a la brevedad el gobierno nacional dicte un proyecto sobre un nuevo régimen de jubilaciones que —según nos informara en el bloque la ministra de Trabajo hace pocos días— se estaría elaborando con la participación de expertos en el tema.

Por lo tanto, adelanto mi voto favorable al proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Maestro.

**Sr. Maestro.** — Señor presidente: como se habrá advertido a esta altura del debate, en el bloque que represento existen opiniones diversas, al igual que en la bancada justicialista.

Nuestra preocupación fundamental es que no protagonicemos hoy un bochorno en el Senado. Queremos que quede un mensaje claro —lo necesitamos todos—, testimoniado en la votación, de que básicamente se derogan todas las jubilaciones especiales y de privilegio que tenía la clase política, porque ese es el reclamo fundamental de la sociedad, y es lo que nos impulsa y conmueve a todos nosotros y, por supuesto, al Poder Ejecutivo nacional.

En función de ello, propongo que en primer lugar se vote —como corresponde por reglamento—, el artículo 1º tal como viene de la Cámara de Diputados.

Al respecto, hay dos posiciones centrales. Hay quienes están por la sanción lisa y llana del artículo 1º según el texto sancionado por la Cámara de Diputados; y quienes promueven diversas modificaciones.

Por lo tanto, considero que debemos tratar de compatibilizar las posiciones, para evitar que si hoy no se alcanza la mayoría suficiente para la ratificación plena del artículo 1º tal como viene de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores no apruebe siquiera la derogación de las jubilaciones de privilegio de la clase política, entendiendo por tales las comprendidas en los artículos 19 a 25 de la ley 24.018.

Por eso digo que si las diversas propuestas que se han hecho no son compatibilizadas y cada uno vota la suya, puede darse el caso —como decía— de que ni siquiera derogemos las jubilaciones de privilegio de la clase política, y todos estamos de acuerdo con su supresión. Respecto de lo demás, hay matices y diversas propuestas que han hecho los senadores Baglini, Prades, Pichetto y Yoma.

Entonces, si el artículo 1º, según la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados, no lograra la mayoría suficiente de votos para su aprobación, sería conveniente que pasáramos a un cuarto intermedio de veinte a treinta minutos, para ver si podemos compatibilizar una propuesta, a fin de lograr un voto afirmativo que, al menos, produzca la derogación de las jubilaciones de privilegio de la clase política.

En lo personal, adelanto que voy a apoyar una modificación al artículo 1º. Además, dejo sentado que algunos senadores de mi bloque —al igual que quien habla— también van a acompañar la propuesta del senador Yoma, incluida en un artículo 2º, de modificación de las condiciones, para acceder a estas jubilaciones especiales, permitiendo un trato de equidad mayor respecto de los demás trabajadores argentinos.

Reitero la posición de que se vote en primera instancia el texto del artículo 1º que viene de la Cámara de Diputados. Si logra la mayoría de votos necesaria para su aprobación, entonces pasaremos a analizar los artículos que siguen. De no ser así, propongo que pasemos a un cuarto intermedio de treinta minutos, para tratar de compatibilizar un texto que nos permita que esta Cámara no pase la vergüenza de no sancionar la derogación de las jubilaciones de privilegio de la clase política, máxime cuando el propio Poder Ejecutivo nacional sostiene esa posición. Asimismo, la señora ministra de Trabajo adelantó en forma prácticamente oficial, a través de los medios, que el Poder Ejecutivo vetaría la derogación de otros regímenes especiales.

La supresión de las jubilaciones de privilegio será un avance significativo con relación a un reclamo del conjunto de la sociedad argentina.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Esta Presidencia entiende que su moción de cuarto intermedio es para después de que votemos el artículo 1º.

**Sr. Maestro.** — Correcto.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Zavalía.

**Sr. Zavalía.** – Señor presidente: en esta hora que vive la República, no es una simplificación demagógica hablar de la eliminación de los privilegios. Por lo tanto, entiendo que cuando hablamos de privilegios no solamente nos estamos refiriendo a este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, que deroga regímenes o privilegios no sólo de políticos. Y, en este sentido, le pido al presidente de mi bloque que me disculpe, pero los políticos, sociológicamente hablando, no somos una clase.

Quiero adelantar mi voto afirmativo para todo el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, pero también mi voto en contra de todos los privilegios que durante estos años de política neoliberal han permitido el enriquecimiento de determinados sectores, como ser el de las empresas privatizadas –que son sectores privilegiados de nuestra sociedad– y el de los organismos internacionales, que hoy gozan también de grandes privilegios para decirnos qué debemos hacer económicamente en el país.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

**Sr. Gioja.** – Señor presidente: es más que claro que las posiciones en este cuerpo no son unánimes. Y como en mi bloque ocurre lo mismo, hemos tomado la decisión de que cada uno vote a conciencia, en razón de que se trata de un tema que es más que sensible.

Quiero adherir a la posición expresada por el señor senador Maestro en el sentido de que si es mayoría la voluntad de modificar el artículo 1º se pase a un cuarto intermedio, que puede ser de menos de media hora. Creo que hay consenso para que así sea.

Estoy seguro de que en el día de hoy esta Cámara le va a dar aprobación a la sanción que viene de la Cámara de Diputados –y así el proyecto será sancionado por el Parlamento– o bien la va a modificar, con lo cual la iniciativa deberá volver a aquel cuerpo, pero en definitiva se va a expedir en este tema que, indudablemente, ha consumido muchas horas y preocupaciones; y que incluso ha generado la duda en muchos colegas en este Senado.

Por lo tanto, no queda más que votar. Y lo que se pone a votación –para que quede claro–, en primer lugar, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Si este obtuviese mayoría, seguiríamos votando la iniciativa. Pero si no fuese así, pasaríamos a un cuarto intermedio

como lo solicitara el señor senador Maestro, con lo cual vamos a consensuar un artículo 1º modificado.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – El señor senador Cafiero me ha pedido la palabra para una inserción.

**Sr. Cafiero.** – Señor presidente: en apoyo a la tesis que mantuve respecto de que la ley 21.540 sostiene el culto católico y no una jubilación ordinaria, ni privilegiada, ni especial, es que voy a pedir la inserción del canon 401 y 402 del Código Canónico, que no tuve sobre mi banca cuando hice uso de la palabra anteriormente.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – En consideración las inserciones solicitadas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Se procederá en consecuencia.<sup>1</sup>

Vamos a aclarar que, antes de poner en consideración la propuesta del señor senador Pichetto de votación nominal, tal cual lo dijo el presidente del bloque justicialista recién, lo que vamos a votar es el artículo 1º conforme a la sanción de la Cámara de Diputados. O sea, quienes voten por el sí, lo harán por la sanción de la Cámara de Diputados, y quienes votan por el no, lo harán por las reformas propuestas por los senadores Pichetto, Baglini y Prades. Digamos, por la opción que pueda haber después del cuarto intermedio.

En consideración la propuesta de votación nominal formulada por el señor senador Pichetto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Aprobada.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Se va a votar el artículo 1º.

–Votan por la afirmativa los señores senadores Agúndez, Avelín, Bar, Busti, Caparrós, Capitanich, Colombo, Curretti, Falco, Fernández, Fernández de Kirchner, Gallia, Gioja, Gómez Díez, Guinle, Isidori, Maza, Mera, Morales, Moro, Negre de Alonso, Ochoa, Pardal, Passo, Paz, Perceval, Raso, Sapag, Taffarel, Terragno, Usandizaga, Walter y Zavalía.

<sup>1</sup> El texto de las inserciones solicitadas figuran en el Apéndice.

—Votan por la negativa los señores senadores Baglini, Caffero, Castro, Chiappe, Colazo, Daniele, Gómez de Bertone, Jeneffes, Lamberto, Lescano, López Arias, Losada, Maestro, Martí, Martín, Menem, Müller, Pichetto, Prades, Salvatori, Seguí, Verna, Yoma y Maqueda.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Queda aprobado el texto del proyecto del artículo 1º sancionado por la Cámara de Diputados. (*Aplausos.*)

—Se enuncia el artículo 2º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Busti.

**Sr. Busti.** — Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de ratificar el artículo 2º tal cual fue sancionado por la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — En consideración el artículo 2º.

Los que estén por la afirmativa sirvanse expresarlo.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Aprobado.

—Se enuncia el artículo 3º.

**Sr. López Arias.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador López Arias.

**Sr. López Arias.** — Recién, antes de la votación, estaba levantando la mano. Hay un pequeño problema que le voy a pedir que me ayude a resolver.

Yo había anticipado que tengo una propuesta de introducción de un artículo nuevo como artículo 3º, que presupondría un cierto cambio en el artículo 2º, por lo siguiente. ¿Qué es lo que yo propongo? Señor presidente: para evitar la tacha de inconstitucionalidad de parte de aquellos que han aportado de más para tener un beneficio especial y no igualar lo que no debe ser igualado porque son situaciones distintas, propongo un artículo que, manteniendo la derogación de todos estos sistemas especiales, introduzca un resguardo para aquellos que han adquirido un derecho por haber hecho aportes especiales.

Este artículo 3º que propongo dice: "También mantendrá el beneficio previsto en el artículo 2º el personal comprendido en el artículo 8º, título

I, capítulo II, y en el artículo 18, título I, capítulo III de la ley 24.018, que a la fecha de la sanción de la presente ley se encuentren en actividad revistando algunas de las categorías profesionales previstas en estos artículos. Para el personal mencionado en este artículo incrementase en dos puntos porcentuales la tasa de aporte personal." ¿Qué significa esto, señor presidente? En la redacción que acabamos de votar del artículo 2º solamente se reconoce el derecho adquirido a aquellos que ya tenían completos los aportes y la edad para estar en condiciones de jubilarse, pero no contemplaba la situación de todos aquellos otros magistrados del Poder Judicial que, sin haber llegado a esta situación, tenían un derecho adquirido por haber hecho aportes especiales. Esto es lo que trata de salvar el artículo que propongo, señor presidente. Podría también incorporarse la gente del Servicio Exterior de la Nación a este articulado; no lo desconozco. De hecho, si bien no es exactamente la misma situación porque el Poder Judicial hace un aporte de puntos porcentuales por arriba de los 11 normales, cosa que en el Servicio Exterior no ocurría, igualmente seguían aportando por arriba de los topes que establecía la ley de solidaridad previsional. No sé si es suficientemente claro, señor presidente.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Sí; es claro.

**Sr. López Arias.** — Yo creo que esto modifica, en realidad, complementa el artículo 2º; consagra este derecho en expectativa que ya ha quedado firme en función de los aportes hechos por este sector y elimina la tacha de inconstitucionalidad posible al hacer esta salvedad. Creo que resguarda la ley garantizando que no vaya a ser tachada de inconstitucional y tenga plena vigencia. Pienso que realmente estamos introduciendo un acto que se ajusta totalmente a lo que son los principios jurídicos de nuestro sistema previsional en la Argentina.

Por ello, voy a proponer la introducción de este artículo 3º. Lo haré llegar a Secretaría, por supuesto; para que se incorpore a sus antecedentes. Asimismo, solicito el acompañamiento de la Cámara, convencido de que es la forma de lograr el objetivo que todos perseguimos, que es mejorar y dar mayor equidad al sistema, evitando la tacha de inconstitucionalidad que necesariamente se va a producir si no se hacen estas correcciones al sistema tal como viene en la propuesta de la Cámara de Diputados.



**Sr. Presidente (Maqueda).** – Señor senador: como está en consideración el artículo 3° y usted hace modificaciones al artículo 2° también...

**Sr. López Arias.** – Perdón, señor presidente: yo propongo la incorporación de este texto como artículo nuevo, a continuación del artículo 2°. Antes de poner en consideración el artículo 3°...

**Sr. Presidente (Maqueda).** – ¡Ah!

**Sr. López Arias.** – ... tendría que ser votada esta propuesta de artículo 3° que realizo. Es decir, sustituiría el actual artículo 3°, que luego pasaría a ser numerado como 4° y así sucesivamente...

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Está bien. Vamos a preguntar al presidente de la comisión si acepta esta incorporación.

**Sr. Busti.** – Señor presidente: cuando se hizo la discusión en general de este proyecto de ley manifestamos que estábamos de acuerdo con el proyecto tal cual había venido de la Cámara de Diputados, sin ninguna modificación.

Por lo tanto, voy a pedir al señor presidente que ponga en consideración el artículo 3° del proyecto, como corresponde después de haber aprobado el artículo 2°, no aceptando la modificación del senador proopinante.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Usandizaga.

**Sr. Usandizaga.** – Señor presidente: más allá de que el presidente de la comisión y miembro informante del despacho en mayoría acaba de aclarar que no acepta la incorporación formulada, quiero dejar constancia de que estoy de acuerdo con la propuesta del señor senador por Salta.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

**Sr. López Arias.** – Señor presidente: quiero aclarar que, si bien la comisión no ha aceptado mi petición, entiendo que se trata de una propuesta que en algún momento y por algún mecanismo la Presidencia deberá someter a votación. Es decir, mi propuesta debe ser considerada por el cuerpo. Al menos yo lo entiendo así. De lo contrario, estaremos provocando una votación falsa, ya que se pasará a votar directamente el artículo 3°, sin considerar mi propuesta.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Es correcto lo que expresa el señor senador por Salta. Correspondía que la Presidencia someta a votación el nuevo artículo propuesto por el señor senador por Salta. Rechazado que fuera, se pasa a votar el artículo 3°.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

**Sr. Baglini.** – Señor presidente: creo que hay otro procedimiento que nos evita esta discusión, es decir, si va un artículo en sustitución de otro. Porque, en realidad, lo que acaba de proponer el señor senador López Arias es un complemento, de manera que no interesa su ubicación. Entonces, propongo que continuemos con la votación y que, antes del artículo de forma, se someta dicho artículo a consideración del cuerpo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Así se hará.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** – Señor presidente: efectué esa aclaración teniendo en cuenta que la propuesta original consistió en incorporar un nuevo artículo 3° y corregir luego la numeración respectiva. O sea, yo me atuve a interpretar la propuesta expresada en forma literal por su autor.

De todos modos, no hay problema si se cambia el criterio y se vota dicho artículo después. Pero, de acuerdo con la propuesta formulada por el señor senador por Salta, correspondería votar dicho artículo ahora.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Esta Presidencia interpreta lo mismo que el señor senador Baglini, en el sentido de que la propuesta formulada debe votarse al final.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3°

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el artículo 4°.

**Sr. Baglini.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

**Sr. Baglini.** – Señor presidente: voy a tener que extenderme mínimamente para referirme a este tema...

–Manifestaciones en el recinto.

**Sr. Baglini.** – ¿Que le pasa, señora?

**Sr. Presidente** (Maqueda). – ¡Por favor, silencio!

Señor senador Baglini: le recuerdo que el tiempo reglamentario del tratamiento en particular está en vigencia.

**Sr. Baglini.** – Señor presidente: voy a atenerme al tiempo reglamentario.

Durante el tratamiento en general se ha negado que exista jurisprudencia uniforme absolutamente conteste de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y de la Cámara Nacional de la Seguridad Social desde su creación en 1989 con relación a este tema.

Sin embargo, existe una tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese sentido, que ha ido evolucionando a través de las sucesivas décadas. Inicialmente, la Corte sostuvo que sólo una merma superior al 30 por ciento de los haberes por medio de la fijación de topes o de límites era confiscatoria. Pero luego esa jurisprudencia redujo ese porcentaje al 22 por ciento y, más adelante, ha llegado incluso al 10 por ciento.

Cuando en 1989 comenzó a funcionar la Cámara Nacional de la Seguridad Social, la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema ya venían empleando los criterios de tope. Los miembros de las salas I y II de la citada Cámara de la Seguridad Social mantuvieron el lineamiento fijado, sin ningún distingo respecto de lo establecido por la Corte Suprema. En cambio, la Sala III de dicha Cámara introdujo una modificación aún más restrictiva, ya que sostuvo que con relación a los haberes que no superaran diez veces el mínimo previsional, el tope máximo admisible era del 10 por ciento y, para los haberes superiores a diez veces el mínimo, del 15 por ciento.

Ese temperamento ha sido mantenido en una serie de fallos que, en realidad, luego han sido confirmados por la Corte Suprema, ya que no ha habido contradicción alguna con respecto al citado criterio de la Sala III, incluido el fallo recaído en el caso “Chocobar”, que aquí ha sido citado durante la consideración en general, y que fundamentalmente está dado en una serie de fallos. No quiero cansar a la Cámara, pero tengo una lista de fallos que arranca con la Cor-

te de 1975 –que adopta ese criterio de confiscatoriedad–, y que termina en el caso más importante de los últimos tiempos –se trata de un verdadero *leading case*– que acá ha sido citado y mal citado. Me refiero al caso “Bieler, viuda de Caraballo, Nelly Edith y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, en donde claramente la Corte de la Nación confirmó la rebaja de haberes introducidas por el gobierno de Entre Ríos, en tanto y en cuanto no provocaban una disminución superior al 15 por ciento.

Y en un fallo paralelo –que está citado en el propio caso “Bieler, viuda de Caraballo”– respecto del caso “Actis Caporale y Loredano”, dijo efectivamente que el tope era 15 por ciento como máximo. Desde allí en adelante se ha producido la reducción que mencionaba, llegando incluso al diez por ciento. Existe incluso una serie de fallos, respecto de los cuales voy a pedir su agregación en el Diario de Sesiones.

Por otro lado, también se negó en la consideración en general que hubiera habido jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y de la Cámara Federal de Seguridad Social, respecto de los topes de la ley de solidaridad previsional, artículo 9º de la ley 24.463.

Eso es absolutamente inexacto, comenzando por el famoso caso “Gaibisso”, en donde se dice textualmente “los artículos 5º, 7º y 9º de la ley 24.463 son inconstitucionales”.

Al margen de eso, que es jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, *in re* Santillán, fallo del 18 de marzo de 1996, dijo: “Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia [...] declarando la inconstitucionalidad de los artículos 5º, 7º y 9º de la ley 24.463 de solidaridad previsional”.

En el caso “De Igarzábal”, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, dijo también en un fallo del 12 de mayo de 1997: “Debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 5º, 7º y 9º de la ley 24.463”.

En el caso “Cittanti” del 10 de setiembre de 1999, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal dijo: “Resultan inconstitucionales los artículos 5º, 7º y 9º de la ley 24.463”.

Y así siguen los fallos, como por ejemplo, los de la Cámara Federal de Seguridad Social en los casos "Quadri", "Gallastegui" y "Basso". Existe además otra serie de fallos, respecto de los cuales también solicitaré su inclusión en el Diario de Sesiones, a los efectos de no agotar a la Cámara.

En consecuencia, voy a proponer sencillamente un agregado en el artículo 4º *in fine* que diga "En ningún caso, la aplicación de los topes previstos en este artículo pueden superar el quince por ciento (15 %) del haber". De esta manera se estaría conteste con la jurisprudencia de la Corte, propuesta que recoge la efectuada por la señora diputada María América González en la sesión de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – ¿La Comisión acepta la propuesta del señor senador Baglini?

**Sr. Busti.** – Señor presidente: la Comisión mantiene el texto original del artículo 4º en lo que hace al tope de los 3.100 pesos, tal como fue sancionado por la Cámara de Diputados, y pido su votación.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Se va a votar el artículo 4º. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo...

Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.

**Sr. Gómez Diez.** – Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo respecto de este artículo. Considero que tal como está redactado, va a originar un conjunto de juicios en perjuicio del Estado.

El señor senador por Mendoza ha sido claro respecto de este artículo y, además, me remito a todos los argumentos y jurisprudencia citados en el debate en general.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Chiappe.

**Sr. Chiappe.** – Señor presidente: comparto plenamente las razones expuestas por el señor senador Baglini.

Como veo que la votación va a ser por signos, solicito que quede constancia de mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el senador Salvatori.

**Sr. Salvatori.** – En igual sentido, señor presidente, quiero expresar mi voto negativo, en adhesión a lo expuesto precedentemente.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el ar-

tículo 4º. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Aprobado.

–Se enuncia el artículo 5º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el senador Baglini.

**Sr. Baglini.** – Solicito la supresión, por superfluo, de este artículo.

La revisión de los regímenes jubilatorios, incluidos los transferidos a la Nación, está en la propia ley 24.241. Se viene ejercitando sin ninguna necesidad de esto. He citado, en el debate en general, numerosos artículos provenientes de uno de los medios de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una importante sección previsional, en los cuales se da cuenta, desde mediados de 2001, de la forma de proceder de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Todos recuerdan los episodios, que han llegado a tener carácter bélico en algún caso, con relación a la revisión de los regímenes previsionales provinciales y nacionales, que costaron la vida, entre otros, del recordado Arturo Pochat, en la sucursal Mar del Plata de la ANSES. Ello es así a raíz de la revisión fundada en las normas actualmente existentes que permiten, tanto lo contemplado en el primer párrafo como, por aplicación simple de la ley de procedimientos administrativos de la Nación, del segundo párrafo, es decir, la declaración de nulidad y la restitución de las sumas indebidamente percibidas, que ya están siendo efectuadas por la ANSES. De manera que el artículo es absolutamente superfluo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Señor presidente: es correcto lo que dice el senador Baglini. El artículo 15 de la 24.241 prevé el procedimiento de revisión de las jubilaciones mal otorgadas. Además, este artículo es defectuoso porque traslada la responsabilidad que le cupo a los estados provinciales, cuando transfirieron las cajas previsionales a la Nación, en el otorgamiento de jubilaciones irregulares. Esa responsabilidad se la traslada al jubilado al establecerse la penalización de la devolución de los haberes percibidos, cuando han sido los propios estados provinciales los que se hicieron cargo de todas y

cada una de las jubilaciones que otorgaron. Esto puede prestarse, además, a una enorme injusticia ya que sabemos que, en muchos de esos estados provinciales, antes de transferirse las cajas a la Nación, los activos eran inducidos a jubilarse, para transferirlos a la Nación, inclusive a través de la alteración de procedimientos jubilatorios. De modo que, quienes tienen que responder primariamente en todo esto, son los estados provinciales que han convalidado jubilaciones irregulares por una parte y que, luego, transfirieron los regímenes a la Nación.

En este caso, señor presidente, voy a votar a favor del artículo, a pesar de que comparto lo que dice el doctor Baglini, porque cualquier modificación a este proyecto de ley serviría para dilatar su sanción y para que vuelva a Diputados, con lo cual no tiene mucho sentido la modificación.

Para ahorrarle tiempo a la Cámara, en el dictamen en minoría, propuse un nuevo artículo, al final y antes de los artículos de forma, en el que planteo una nueva suerte de delegación legislativa para poder bajar la edad jubilatoria en el caso de los docentes. Este es otro beneficio de uno de los regímenes especiales que tenían las provincias argentinas y que fueron ilegalmente derogados, avasallados o no cumplidos por parte de la Nación cuando se hizo cargo de ellos. Me refiero a la edad diferenciada para el caso de los docentes en lo que hace al acceso a la jubilación, además de los aportes.

Pero como esta ley va camino al veto —ya anunciado, por otra parte, por el Poder Ejecutivo—, si la Cámara o el Congreso, en el marco de esta ley que va a ser vetada, convalida el artículo que propongo, que es bajar la edad jubilatoria para los docentes, temo que corra la misma suerte que el conjunto de la ley, es decir que también sea vetada esta reparación a los docentes de las provincias argentinas. Así que voy a transformar lo que ha sido un artículo en la disidencia presentada en un proyecto de ley autónomo, para que pueda ser tratado en el marco del restablecimiento, para los docentes argentinos de la edad jubilatoria diferenciada, tanto para las mujeres como para los hombres.

**Sr. Presidente** (Maqueda). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

**Sra. Colombo**. — Señor presidente: el artículo 5º dispone la facultad redundante —a mi entender— de revisión por parte de la Administración

Nacional de la Seguridad Social sobre los beneficios otorgados. Digo redundante con relación a los regímenes provinciales transferidos a la Nación, a la órbita de la ANSES.

Con relación a las leyes derogadas por esta norma, en su artículo 1º, que acabamos de votar afirmativamente, creo que no es redundante porque son regímenes legales preexistentes a la ley 24.241, que se refiere al sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

Ahora, ampliar esta facultad a la posibilidad de revisar expedientes otorgados en el marco de la transferencia a las cajas de jubilaciones provinciales a la Nación, a mi entender, abre la posibilidad para que la ANSES profundice —al menos en lo que a mi provincia se refiere, como ya dije en oportunidad del tratamiento en general de este proyecto— la persecución política que se está instrumentando contra los jubilados transferidos por Catamarca a la Nación.

Voy a responder a lo que acaba de señalar el señor senador por la provincia de La Rioja, porque la responsabilidad sobre los beneficios otorgados no solamente les cabe a las provincias que transfirieron sus cajas, sino también en el caso concreto de la provincia de Catamarca es tan responsable la ANSES como ella por los beneficios otorgados, porque cada uno de los beneficios otorgados en el marco del convenio de transferencia de la Caja de la provincia a la Nación han sido suscritos por autoridades de la provincia y de la ANSES.

Tal vez en la provincia del señor senador sea distinto el régimen, como lo han sido tantas otras cosas, pero en el caso de Catamarca quería dejar salvada esta cuestión y que conste que la responsabilidad sobre los beneficios otorgados le cabe tanto a la provincia como a la ANSES. Curiosamente, después de prácticamente ocho años, recién está haciendo uso de esta facultad de revisión que jamás la provincia de Catamarca le negó y que incorporó expresamente en la resolución de otorgamiento de beneficios como artículo 3º de cada una de las resoluciones por las cuales esos beneficios fueron otorgados por iniciativa de los funcionarios catamarqueños. Cada resolución dice en su artículo 3º, reitero, que la ANSES puede revisar todos y cada uno de los beneficios otorgados.

Quería hacer esta aclaración y señalar que lamentablemente, por esta razón voy a votar en contra el artículo 5º.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Le doy la palabra al senador Yoma, que ha sido aludido.

**Sr. Yoma**. – No quiero tener un problema con mis primos hermanos catamarqueños. Concretamente les voy a decir a qué me refiero, más allá de que creo que son los estados provinciales los que tienen que responder por todas y cada una de las jubilaciones que han sido convalidadas por las provincias. Pero yo me refiero a que la ANSES está mandando telegramas pidiéndole la restitución, por ejemplo, a las jubiladas amas de casa. Se trata de cuatro o cinco mil jubiladas por leyes provinciales que tenían pocos años de aportes –diez años– que ganaban ciento cincuenta pesos por mes, y la ANSES decidió que no podían acreditar fehacientemente el aporte, con lo cual le dieron de baja. Además, obligaron a restituir a esas personas el único haber que tienen –o que tenían– de 150 pesos, respecto de los cuales en algunos casos pudimos conseguir que el Poder Ejecutivo las transforme en pensiones graciables, no jubilaciones. Porque es cierto, no son jubilaciones sino beneficios no previsionales. Pero en este caso, la ANSES, por lo menos en la gestión del gobierno anterior, les estaba enviando cartas documento a esas miles de amas de casa jubiladas para que devuelvan durante cuatro años lo que habían percibido –según ese organismo– de manera incorrecta.

Imagínense lo que puede significar para estas personas que, además de perder el único haber de 150 pesos mensuales, y que no hicieron aportes a ninguna caja –ese era el sentido de las leyes de jubilación de amas de casa–, de pronto, le cae ese tamaño peso que significa tener que devolver todo lo que recibieron y que, reitero, les fue otorgado por los estados provinciales.

Entonces, me refiero a estos casos concretos y no al pleito que puedan tener los gobiernos provinciales por jubilaciones mal otorgadas. Esa es otra cuestión.

Señor presidente: que el artículo en consideración no signifique que la responsabilidad se va a trasladar a esas personas cuando, en todo caso, les corresponde a los estados provinciales que las han otorgado y que, en definitiva, son jubilaciones o pensiones y, además, constituyen el único haber de que disponían. No puede ser que por cambiar el régimen y plantear que ahora no son jubilaciones, se les obligue a devolver

los cuatro o cinco años de percepción de los haberes.

Me refería a esas cuestiones y no a los problemas de los hermanos catamarqueños que, seguramente, también se producen en mi provincia.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Busti.

**Sr. Busti**. – Señor presidente: quiero proponer que se pase a votar el artículo 5º tal como fue sancionado en la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Resulta aprobado.

–Sin observaciones se vota y aprueba el artículo 6º.

–Se enuncia el artículo 7º.

**Sr. Baglini**. – Pido la palabra.

Señor presidente: el artículo en consideración es una curiosidad legislativa.

Digo esto porque en la Cámara de Diputados, al momento de votarse el texto, reunió 78 votos a favor sobre 168 votos presentes. No hace falta ser matemático para darse cuenta de que no obtuvo mayoría. Y es una curiosidad legislativa porque el presidente de la Cámara, frente a esa instancia, propuso que no se tomaran en cuenta las abstenciones, ni las no autorizadas ni las autorizadas, a los efectos del cómputo de la votación. Posteriormente, se votó en forma nominal y se rechazó el artículo. Pero la curiosidad legislativa termina cuando se vota exactamente otro artículo igual al que se acababa de rechazar, incorporándolo como artículo 7º.

La curiosidad legislativa se completa porque, sobre tablas, se le agrega una incompatibilidad que ya, de por sí, es difícil de justificar –luego lo voy a explicar–, pues se incorpora la palabra “privada”. Es decir, no solamente se crea en las jubilaciones de 12,5 Mopres una incompatibilidad con el ejercicio de cualquier función pública nacional, provincial y municipal, sino también privada.

Esto regiría no solamente para los regímenes especiales o de privilegio, que están derogados por el artículo 1º, sino también para los regíme-

nes previstos en el artículo 11 de la ley 23 966 y todos los regímenes de las cajas provinciales o municipales transferidas; es decir, el régimen jubilatorio normal de una caja de jubilaciones provincial.

Vamos a advertir qué cosas suceden con esto.

En primer lugar, si uno combina el artículo 4º con el 7º acabamos de imponer un tope que, en algún caso puede ser del 70 por ciento del haber de un jubilado y, además, le fijamos una incompatibilidad absoluta para desempeñarse en la actividad privada. Esto vulnera abiertamente el derecho constitucional de trabajar y el de igualdad, porque el artículo 34 del Régimen General de Jubilaciones, ley 24.241, dice específicamente para todos los beneficiarios —no los de privilegio sino los comunes—, aun para los que no sufren ninguna merma en sus haberes: “Los beneficiarios del Régimen Previsional Público podrán reingresar a la actividad remunerada, tanto en relación de dependencia como en carácter autónomo”.

Eso es lo que dice la ley general para los sistemas generales. Entonces, además de tope, tenemos previsión no sólo en la actividad pública sino también en la privada. De ser así, señor presidente, a un jubilado por auténtica incapacidad del régimen provincial, veremos que si se lo incluye aquí no podrá desempeñarse, lo cual va en contra de toda la teoría en materia de discapacitados que exige que una persona con discapacidad tenga, en lo posible, algún trabajo o distracción que lo lleve, de alguna manera, a sentirse útil o un elemento integrado al resto de la sociedad, en el caso de las denominadas capacidades diferentes, como realmente se las llama.

Además de esto, la curiosidad se torna extraordinaria en el caso de un investigador científico-tecnológico. Ante todo, quisiera recordar que los premios Nobel que la humanidad ha concedido este año fueron otorgados a personas que rondan, en general, entre los 65 y 85 años de edad, encontrándose la mayoría jubilada y perteneciendo al núcleo de investigadores científicos que han sido contratados por las universidades, pese a estar jubilados.

Lo que he señalado anteriormente, no puede hacerlo un investigador científico que se haya jubilado en el régimen promedio. En su momento, durante la discusión en general hemos citado que el régimen promedio de un investigador cien-

tífico-tecnológico es de 1.300 pesos; es decir que está por encima del tope de los 12,5 Mopres. Pero no solamente están en el promedio sino que hay quienes están por debajo del promedio. Además, les imposibilitamos cumplir funciones en la actividad privada.

Advierta también, señor presidente, que para el caso específico de algunos regímenes, como el de los magistrados, la vulneración del principio de igualdad es alevosa, porque los que están en actividad tienen autorizado el ejercicio de la docencia, mientras que los que se encuentran jubilados no pueden hacer absolutamente nada. Si esto no lo declara inconstitucional el juez de Paz de Perico, señor presidente, pega en el poste.

**Sr. Menem.** — ¿Qué tenés con Perico? *(Risas.)*

**Sr. Baglini.** — No tengo nada.

Lo que quiero significar es que nosotros también somos custodios de la constitucionalidad de las leyes y esto no es una función de la Justicia. Como no podemos sancionar cualquier barbaridad, quiero decirles que esto es una barbaridad que se encuentra manifestada en el resultado de la discusión en la Cámara de Diputados —que es de “Ripley”—; en la votación y en las consecuencias parlamentarias que esto tendrá. Pero metámosle, votemos nomás, total vendrá un veto.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Falcó.

**Sr. Falcó.** — Señor presidente: quisiera dejar constancia de mi voto negativo para el artículo 7º.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: he pedido la palabra para ratificar mi oposición a esa incompatibilidad, como lo señalara durante la discusión en general y hace unos momentos durante el tratamiento del artículo 1º. Considero que se trata de una disposición que, bajo ningún punto de vista, puede ser admitida en nuestro régimen legal.

Quiero decir que estamos escribiendo la crónica de un resultado anunciado, como va a ser la declaración de inconstitucionalidad, cuyas

razones señalé durante la discusión en general y que fueran hace unos instantes muy bien expuestas por el señor senador Baglini.

Por las razones mencionadas voy a votar en contra de esta resolución.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Usandizaga.

**Sr. Usandizaga.** – En el mismo sentido, presidente.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Salvatori.

**Sr. Salvatori.** – En el mismo sentido.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Seguí.

**Sra. Seguí.** – En el mismo sentido.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Chiappe.

**Sr. Chiappe.** – Voy a votar en el mismo sentido, señor presidente, y solicito que así se deje constancia.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Lamberto.

**Sr. Lamberto.** – Señor presidente: voy a votar en contra de este artículo porque, además, está casi concebido para provocar la fuga de genios de la Argentina. Incluso, esto fue planteado en su momento durante su tratamiento en comisión.

Se trata de una forma en la cual la inteligencia acumulada, me refiero a aquella adquirida por la persona que a lo largo de los años se capacitó para hacer algo, se cercena cuando puede ser volcada a la sociedad, tanto en la actividad pública como privada, como valor agregado. Así vamos a fomentar que la gente se vaya.

Por las razones expuestas voy a votar en contra.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Paz.

**Sra. Paz.** – Voy a votar en contra del artículo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

**Sr. Jenefes.** – Voy a votar en contra del artículo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

**Sra. Perceval.** – La he pedido para dejar constancia de que voy a votar en contra de este artículo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Gómez de Bertone.

**Sra. Gómez de Bertone.** – Voy a votar en contra de este artículo, como ya lo expresara en el informe que he acercado a la Presidencia.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Bar.

**Sra. Colombo.** – Efectuemos la votación nominal.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Un momentito. Cuando yo le dé la palabra usted lo va a proponer; mientras tanto, tiene la palabra la señora senadora Bar.

**Sra. Bar.** – Señor presidente: voy a votar a favor porque considero que, respetando los argumentos que ha dado el señor senador Baglini –quien explicitó los derechos adquiridos y el respeto y reconocimiento a los profesionales–, también en nuestro país hay miles y miles de profesionales que están tratando de ingresar en la actividad, ya sea estatal o privada, y muchas veces no acceden a un puesto de trabajo porque está absorbido por quienes ya tienen una jubilación y, obviamente, cuentan con más currículum y trayectoria profesional.

Creo que ése fue el espíritu de la norma: dar trabajo a quienes hoy no lo tienen.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

**Sr. Yoma.** – Obviamente comparto lo dicho por el señor senador Baglini y otros señores senadores, y además lo mencioné en mi exposición en general.

Lo cierto es que si nosotros modificamos este artículo o lo rechazamos, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados. Si la intención es ésa, solicito que lo avisen con anticipación porque, de ser así, corregimos toda la norma, ya que existen muchas cosas que considero sería conveniente modificar. Si la decisión del Senado es que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, digámoslo antes, tomémonos una semana más para estudiarlo y modifiquemos todo lo que sea necesario.

Pero no me parece sensato que la norma vuelva a Diputados por un solo artículo, cuando existen muchos temas que se podrían incorporar, como por ejemplo el relacionado con los docentes y la Ley de Insalubridad, entre otros.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

**Sra. Colombo.** — Simplemente para solicitar que la votación de este artículo se realice en forma nominal.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — En su oportunidad será puesto a consideración del cuerpo.

Tiene la palabra la señora senadora Kirchner.

**Sra. Fernández de Kirchner.** — Señor presidente: quiero expresarme en igual sentido que la señora senadora Bar y el señor senador Yoma. Pero quiero comenzar por el argumento del senador Yoma, a fin de evitar discursos largos.

Someramente he escuchado algunas manifestaciones de quienes habían votado de determinada manera en las partes centrales y medulares del proyecto y que ahora votaron negativamente, más allá del derecho que le asiste a cada senador y senadora de aprobar cada norma.

Pero lo cierto es que este régimen ya está vigente en muchas provincias argentinas.

En el caso de la provincia de Santa Cruz —al igual que en la de Tierra del Fuego, según me lo comentaba su senadora—, existe una incompatibilidad relacionada con el sistema de reparto solidario, que tiene que ver con la solidaridad de quien está percibiendo una jubilación del sistema solidario y recibe otro ingreso, ya sea público o privado. Si es público, creo que no requiere de mayores argumentos el hecho de estar percibiendo de un mismo sector —el sector público— dos ingresos; si lo percibe por parte del sector privado, quiere decir que seguramente está con mejores condiciones monetarias y económicas que las que ya percibe; y, si no, puede optar por uno u otro.

En primer lugar, para creer y desechar cualquier argumento de presunta inconstitucionalidad de este sistema, quiero mencionar que ya está vigente en provincias argentinas, donde no fue declarado inconstitucional y, además, tiene absoluta legitimidad. Esto está relacionado con lo que acabamos de decir, tanto yo como la señora senadora por Entre Ríos.

Por otra parte, el argumento de que por esto “se van a ir los genios del país”, realmente hiere la inteligencia de quienes estamos sentados acá y de aquellos que van a leer la versión taquigráfica. Los genios que se han ido del país lo han hecho por otros motivos y no porque se ha modificado una ley de jubilaciones.

Pero si la estrategia es “quedar bien” derogando los artículos, que vuelva la norma a la

Cámara de Diputados y que todo siga igual en este bendito país, lo único que pido es que se ponga la cara. Siempre he sostenido que cuando se vota o se está convencido de las cosas no se deben buscar argumentos sinuosos, por los cuales se vaya llegando al lugar que se dice no querer llegar, pero se llega igual por acción, por omisión o por modificación de la propuesta.

Por lo tanto, deseo que quede en claro que si esto se modifica, la voluntad del Senado será la de no modificar la situación en materia de regímenes de privilegio.

Señor presidente: que quede claramente establecido cómo va a votar cada uno de los señores senadores, porque de una de las cosas en las cuales los parlamentarios tenemos que empezar a hacernos cargo en este país es de cómo votamos y lo que significa cada voto nuestro.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** — Señor presidente: me expreso en el mismo sentido, esto es, por que no se modifique ningún artículo, ni un punto ni una coma, de la sanción de la Cámara de Diputados. Sería muy riesgoso que por alguna modificación a algún artículo el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y no se deroguen las jubilaciones de privilegio.

El bloque del Frente Cívico sostiene que se apruebe el proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Baglini.

**Sr. Baglini.** — Señor presidente: como se ha mencionado que hay argumentos sinuosos, reitero que respecto del régimen solidario al que se ha referido una senadora preopinante, el artículo 34 de la ley 24.241 admite que se vuelva a reincorporar el jubilado a la actividad, tanto en relación de dependencia como autónomo.

De manera que el quebrantamiento no es por un argumento sinuoso. Se trata de disposiciones clarísimas de la ley a la cual los regímenes provinciales transferidos tienen obligatoriamente que adecuarse.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Busti.

**Sr. Busti.** — Señor presidente: estoy de acuerdo en que se mantenga el texto de la sanción de la Cámara de Diputados.



Durante años en la Argentina notorios economistas y formadores de opinión se cansaron de despotricar contra el gasto superfluo del Estado, pero con el tiempo nos enteramos de que muchos de ellos cobraban jubilaciones de privilegio del Estado, como el economista Alemann, y por otro lado eran directores de sociedades anónimas y trabajaban en la actividad privada.

Por lo tanto, este artículo es absolutamente justo en el marco de la emergencia previsional que vive el país. Solamente toca a los jubilados que cobran más de 1.000 pesos, o sea, 12,5 Mopres.

En consecuencia, solicito que se someta a votación el artículo tal como vino de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** — Señor presidente: me parece que el debate central de este proyecto de ley se dio en el artículo 1º. Algunos considerábamos que, sin ninguna duda, había que derogar las jubilaciones políticas y dejar subsistentes los sistemas especiales. Después de esa votación, considero que algunas de las razones que ha expresado el senador Baglini —lo digo personalmente, sin comprender a mi bloque— tienen contenido. Quizá sea un exceso del legislador haber incluido a la actividad privada. En este momento no tiene que haber ninguna duda. No puede considerarse esto como un artificio para que el proyecto vuelva a la otra Cámara. Habría que aprobar el proyecto de ley como está y avanzar decididamente con otros temas que hoy tenemos que tratar.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, pongo en consideración la propuesta de la senadora Colombo de votación nominal.

Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Queda aprobada. En consecuencia, se procederá a la votación nominal.

—Se practica la votación nominal.

—Votan por la afirmativa los señores Agúndez, Avelin, Bar, Busti, Cafiero, Caparrós, Capitanich, Castro, Colombo, Culetto, Fernández, Fernández de Kirchner, Gómez Diez, Guinle, Halak, Isidori.

—Votan por la negativa los señores Baglini, Chiappe, Colazo, Daniel, Falcó, Gómez de Bertone, Jeneff, Lamberto, Lescano.

—Al emitir su voto, dice el señor senador López Arias:

**Sr. López Arias.** — Señor presidente: solicito autorización para abstenerme.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — En consideración la solicitud del señor senador López Arias.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Continúa la votación nominal.

—Votan por la afirmativa los señores senadores Martí, Maza, Mera, Morales, Moro, Negre de Alonso, Ochoa, Pardal, Pardo, Passo.

—Votan por la negativa los señores senadores Martín, Menem, Müller, Oviedo, Paz.

—Al emitir su voto, dice la señora senadora Perceval

**Sra. Perceval.** — Afirmativo, en función de que la ley salga aunque...

**Sr. Presidente (Maqueda).** — No se puede; hay que votar, señora senadora.

—Votan por la afirmativa los señores senadores Pichetto, Raso, Sapag, Taffarel, Walter, Yoma, Zavala y Maqueda.

—Votan por la negativa los señores senadores Salvatori, Seguí, Usandizaga y Verna.

**Sr. Secretario (Oyarzún).** — Han votado 35 señores senadores por la afirmativa, 18 por la negativa y 1 abstención.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Queda aprobado el artículo 7º.

Esta Presidencia considera que es oportunidad para tratar el artículo propuesto por el señor senador López Arias, a quien le vamos a pedir que lo lea nuevamente.

**Sr. López Arias.** — Señor presidente: este artículo es a los efectos de evitar la tacha de inconstitucionalidad, resguardando derechos adquiridos de quienes están en el régimen especial haciendo aportes especiales.

El artículo dice lo siguiente: también mantendrá el beneficio previsto en el artículo 2º el personal comprendido en el artículo 8º, título I, capítulo II, y el artículo 18, título I, capítulo III de

la ley 24.018, que a la fecha de la sanción de la presente ley se encuentren en actividad revistando en alguna de las categorías profesionales previstas en estos artículos. Hago la aclaración de que estos artículos que mencioné pertenecen exclusivamente al Poder Judicial. Para el personal mencionado en este artículo, incrementase en dos puntos porcentuales la tasa de aportes personales.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Busti.

**Sr. Busti.** — Señor presidente: le propongo al señor López Arias que deje que sancionemos este proyecto de ley para que luego proponga la incorporación de este artículo mediante un nuevo proyecto de ley que será sometido al debate correspondiente.

No aceptamos la incorporación de un nuevo artículo, queremos que se sancione hoy este proyecto de ley. Y que luego el senador López Arias presente como un proyecto de ley este artículo que se debatirá en las comisiones respectivas del Senado.

Pero ahora que se apruebe tal cual como está, para que realmente pueda ser sancionado este anhelo que tiene la sociedad argentina de terminar con estos regímenes especiales.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Passo.

**Sr. Passo.** — Señor presidente: quiero oponerme a la propuesta del senador por Salta, fundamentalmente, porque en el tratamiento de todo el proyecto de ley aparecieron dos hechos que me parece importante comentar aquí.

El primero de ellos es que el Poder Ejecutivo amenazó permanentemente con vetar la ley que escribió. Y el segundo de los hechos es que ante cada artículo hacemos hablar a los jueces, hipotéticamente, por fallos o decisiones que van a tomar.

En el derecho argentino la principal fuente es la ley legislada. Y la ley legislada dice que en la Argentina, a partir de hoy, se han terminado las jubilaciones de privilegio.

No creemos argumentos que generen una "patria judicial" superior a lo que dice la principal fuente del derecho argentino. El Parlamento argentino va a sancionar una ley que termina —gracias a Dios— con los privilegios de las jubilaciones en la Argentina.

Esta es la ley legislada, y habrá que juntar muy buenos argumentos para torcer lo que dice

cada uno de los artículos de esta ley, que es la voluntad ampliamente mayoritaria del Parlamento argentino.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: no puedo dejar pasar por alto la afirmación que acaba de hacer el señor senador por La Pampa.

Yo simplemente quiero recordar el artículo 31 de la Constitución. Hay una jerarquía normativa en virtud de la cual, por arriba de la ley que sanciona el Parlamento, está la Constitución Nacional.

Están también incorporados los tratados internacionales en materia de derechos humanos y asimismo los tratados con potencias extranjeras, pero fundamentalmente, en la cúspide, está la Constitución.

Los que argumentamos que acá se violaban los derechos adquiridos hacíamos referencia, precisamente, a la Constitución Nacional.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador López Arias.

**Sr. López Arias.** — Pido que se someta a votación. Los argumentos han sido dados reiteradas veces.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Tiene la palabra el señor senador Zavallía.

**Sr. Zavallía.** — Señor presidente: quiero decirle al senador Menem que, al hablar de la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, debemos tener en cuenta que ella establece que no hay prerrogativas en este país. Y lo que tenemos que entender y comprender los legisladores en este momento, es que el espíritu de este proyecto de ley es suprimir, evitar las discriminaciones y anular definitivamente todos los privilegios. Porque éste es el reclamo que nos formula la República a quienes representamos al pueblo argentino.

**Sr. Presidente (Maqueda).** — Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor senador Menem.

**Sr. Menem.** — Debe ser por enésima vez que aquí se repite la misma cuestión; existen diferencias de criterio entre los que entienden que es un privilegio y los que entendemos que no lo es.

Yo adhiero totalmente al artículo 16 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el principio de igualdad. Pero no hay peor desigual-

dad que tratar igual a los que son desiguales. Este es un principio liminar en materia jurídica y de interpretación del derecho.

Por eso, vuelvo a repetir: por arriba de la ley que sancionemos nosotros está la Constitución Nacional, que establece principios que son fundamentales; son pilares del estado de derecho. Una ley que viole dichos principios está atacando también al estado de derecho.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

**Sr. López Arias.** – Señor presidente: las consideraciones vertidas me obligan a decir brevemente dos conceptos.

El primero de ellos es que este artículo que propongo presupone la derogación de los regímenes especiales; está admitiendo y convalidando la derogación de los regímenes especiales. Dice que para los futuros magistrados realmente va a estar derogado todo el sistema especial. Pero también dice que aquellos que hoy están en el sistema haciendo un aporte especial tienen que tener un trato especial. Así de simple, respetando el principio liminar establecido en la Constitución Nacional. Esto no es rescatar ningún privilegio sino reconocer el derecho que adquieren aquellos que, en su momento, han hecho un esfuerzo especial para tener algún tipo de beneficio especial.

Esto es importante aclararlo, como también que –repito– se refiere exclusivamente a la gente del Poder Judicial. Para cualquier tipo de duda que pueda haber, están excluidos de este beneficio lo que son sistemas políticos y todo lo demás, que quedan fuera de este reconocimiento de derecho por la sencilla razón de que no hacían aportes especiales, como en este caso.

Con esta salvedad, señor presidente, voy a pedir la votación del artículo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Muy bien; así se hará cuando se agote la lista de oradores.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – He pedido el uso de la palabra simplemente para apoyar lo que ha dicho el senador por La Pampa.

En realidad, los tratados sobre derechos humanos establecen que no se puede oprimir a los que menos tienen para beneficiar con prebendas los nichos de privilegiados en este país.

La doctrina de la emergencia está reconocida, incluso, por la Corte Suprema de Justicia.

En un país como en el que estamos viviendo la pretensión de mantener este sistema es violar la Constitución; es violar el artículo 16 y violar francamente los tratados sobre derechos humanos.

Por lo expuesto, comparto ampliamente lo que ha dicho el senador Passo.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el senador Baglini.

**Sr. Baglini.** – Señor presidente: yo iba a hacer una acotación, pero me veo obligado a hacer otra, dadas las expresiones de los señores legisladores preopinantes.

No es del caso reproducir la discusión en general. Me parece que la doctrina de emergencia la acaba de fijar la Corte que tenemos hoy hace cuarenta días en el fallo “Tobar”, que fulmina de nulidad el último párrafo del artículo 4° que se ha votado aquí.

Esa es la doctrina de la Corte, y la Constitución es lo que la Corte dice que es la Constitución; y la Corte ha dicho en materia jubilatoria cosas absolutamente terminantes que no van a ser dadas vuelta por una discusión en el recinto ni por el deseo de los legisladores.

Precisamente por eso, señor presidente, la forma de derogar las jubilaciones especiales o de privilegio es hacerlo ordenadamente. Por eso iba a proponer otro artículo; pero como no tiene caso porque la comisión no lo va a receptar, simplemente quiero cumplir con la responsabilidad que tenemos como representantes de las provincias y dejar sentado claramente que, por aplicación de los convenios de transferencia de las cajas provinciales, las provincias responden solidariamente con la Nación por las costas judiciales de los juicios.

La Nación, señor presidente, se va a tener que hacer cargo de las costas de esta legislación que nosotros estamos sancionando. Yo quiero dejar sentado este principio. Hubiera propuesto un artículo –así lo hizo el señor diputado Neri en el artículo 5° de la ley que estamos votando–, pero no tiene sentido hacerlo. Quiero sí dejar hecha esta aclaración, señor presidente, porque de otra manera consideraría que no estamos cumpliendo con la función de representantes de las once provincias que han transferido sus cajas y que van a responder solidariamente, a elección del actor, por las costas en los juicios de inconstitucionalidad derivados de esta ley.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Tiene la palabra el senador Moro.

**Sr. Moro.** – Señor presidente: interpreto que la sustancia del razonamiento expuesto por los señores senadores por La Pampa, Santiago del Estero y San Luis ha estado alentada por varias referencias efectuadas con anterioridad en este tratamiento, indicando las prevenciones acerca de eventuales diferencias de interpretación judicial.

Creo que estos tres senadores en modo alguno han desconocido la pirámide jurídica tradicional ni la supremacía de la Constitución ni la intervención final en aquellos supuestos controversiales que le corresponde a la jurisdicción judicial, en especial a la de más alto rango, que es la Corte Suprema de Justicia.

Lo que se ha dicho, señor presidente, es que no se debe cubrir de acechanzas la expresión mayoritaria de la soberanía popular, expresada a través de la legislación, en la interpretación, que no creo que sea ni aventurada ni incorrecta, de que en el entretiem po no existe ninguna otra forma de constitucionalidad preventiva, que es la que declaran las leyes de la Nación.

Entonces, podemos admitir que en una eventual colisión surjan cuestionamientos por

una u otra razón. Lo que no podemos dejar de reconocer es la importancia jerárquica que en este instante de la consideración de los órganos públicos tiene la sanción que realiza este Senado, que por ser final termina de redondear la ley.

En ese sentido, sin desconocer aquellas referencias tradicionales de la pirámide jurídica, de acuerdo con la Constitución hoy esta sanción es, hasta tanto se diga lo contrario, la voz de aquella.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo propuesto por el señor senador López Arias.

–La votación resulta negativa.

–Se enuncia y aprueba el artículo 8º.

–El artículo 9º es de forma.

**Sr. Presidente (Maqueda).** – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 18 y 22.

RUBÉN A. MARINO,

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

## 5

### APENDICE

#### I

### SANCION DEL HONORABLE SENADO

#### 1

#### Derogación de regímenes jubilatorios especiales

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 6751

## II

### INSERCIONES

#### 1

**Solicitada por el señor Baglini**

MINISTERIO DE TRABAJO,  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

*Secretaría de Seguridad Social*

Beneficios previsionales de regímenes especiales con haberes superiores a \$ 3.100

BENEFICIOS CON HABERES SUPERIORES A \$ 3.100

Datos a agosto del 2001

• Son un total de 9.263 jubilaciones y pensiones, que representan en el total de beneficios del sistema previsional un 0,25 % del total de casos.

- Tienen un haber promedio de \$4.038.
- Importan un gasto anual de \$ 486 millones, que representa un 3 % del gasto previsional.

### Beneficios previsionales y con haberes mayores a \$ 3.100: casos y monto anual devengado

	Jubilaciones pensiones	Gasto anual (2000) -en millones de pesos-
1. Beneficios totales régimen de reparto + PNC	3.650.841	15.898,8
2. Beneficios de regímenes especiales con haberes mayores a \$ 3.100 <sup>1</sup>	9.263	486,2
3. 2/1	0,25 %	3,06 %

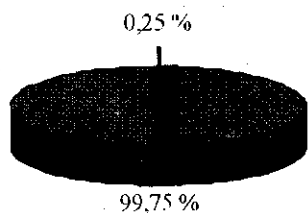
Nota: <sup>1</sup> Excluye beneficios de leyes 18.037 y 24.241.

### Beneficios con haberes mayores a \$ 3.100: casos, haberes medios (en pesos) y monto (en millones de pesos)

	Beneficios		Haberes medios	Monto anual	
	Casos	Porcentaje		Monto	Porcentaje
Sistema nacional	3.289	35,5 %	3.951	168,9	34,7 %
Sentencias judiciales	1.042	11,2 %	3.897	52,8	10,9 %
CSJN	1.233	13,3 %	5.051	81,0	16,7 %
Ex cajas provinciales	3.687	39,8 %	3.800	182,1	37,5 %
PNC	12	0,1 %	9.119	1,4	0,3 %
Total	9.263	100,0 %	4.038	486,2	100,0 %

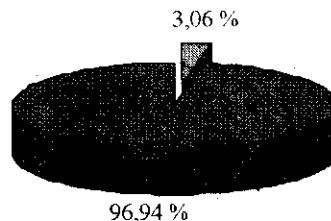
### Beneficios con haberes superiores a \$ 3.100

#### Beneficios previsionales nacionales



■ Sistema nacional + PNC ■ Beneficios con haberes > \$ 3.100

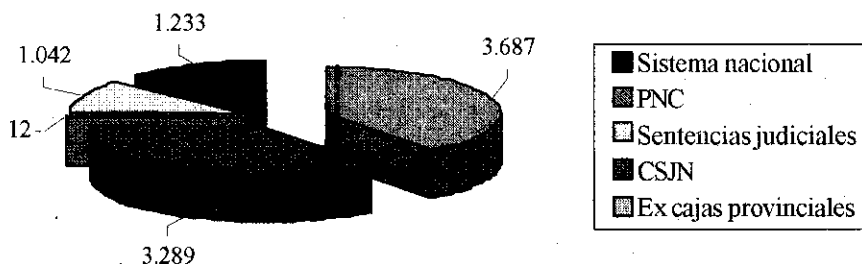
#### Gasto previsional nacional



■ Sistema nacional + PNC ■ Beneficios con haberes > \$ 3.100

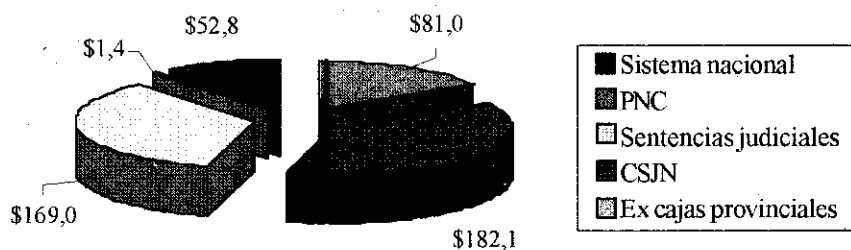
### Cantidad de beneficios con haberes superiores a \$ 3.100

Total de beneficios: 9.263 casos



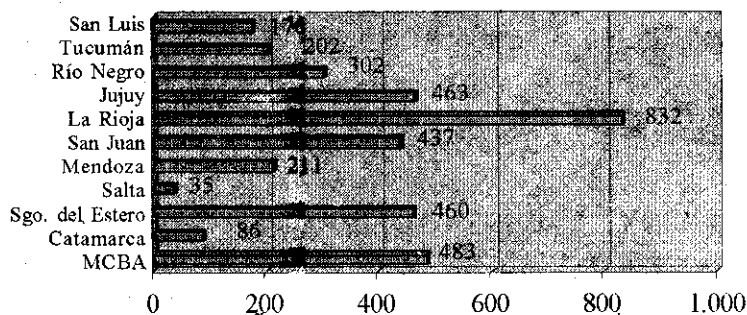
### Monto anual de los beneficios con haberes superiores a \$ 3.100

Monto anual: \$ 486,2 millones



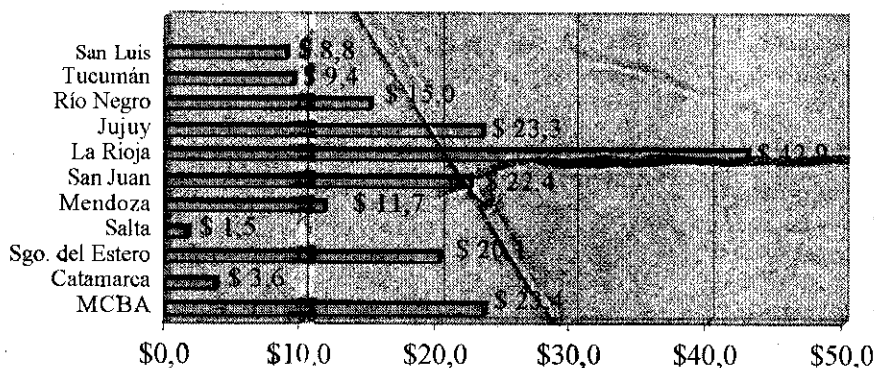
### Ex cajas provinciales: beneficios con haberes superiores a \$ 3.100

Total de beneficios: 3.687 casos



# Ex cajas provinciales: monto anual de los beneficios con haberes superiores a \$ 3.100

**Monto anual: \$ 182,1 millones**



Casi 10.000 son: "Haberes superiores a \$ 3.100".

Régimen nacional (sin Poder Judicial) Poder Judicial: 1.300.

Regímenes provinciales.

Son leyes "comunes" que hicieron juicio por tope.

-Serv. Ext./Inv./Pod. Ejec./Pod. Leg./haber medio \$ 3.900.

-Poder Judicial: haber medio \$ 5.000.

-Reg. especiales provinc. "transferidos" - Haber medio \$ 3.800.

Más 1.000 de sentencias "comunes".

## Secretaría de Seguridad Social

### Beneficios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Casos, haberes medios (en pesos) y monto (en millones de pesos)

	Jubilaciones	Pensiones	Total
<b>Casos</b>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	709	524	1.233
Haberes menores a \$ 3.100 .....	1.031	856	1.887
Total .....	1.740	1.380	3.120
<b>Haberes medios</b>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	5.428,5	4.541,3	5.051,4
Haberes menores a \$ 3.100 .....	2.389,8	1.832,6	2.137,0
Total .....	3.628,0	2.861,1	3.288,8
<b>Monto mensual</b>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	3,8	2,4	6,2
Haberes menores a \$ 3.100 .....	2,5	1,6	4,0
Total .....	6,3	3,9	10,3
<b>Monto anual</b>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	50,0	30,9	81,0
Haberes menores a \$ 3.100 .....	32,0	20,4	52,4
Total .....	82,1	51,3	133,4

Fuente: Secretaría de Seguridad Social.

**Secretaría de Seguridad Social***Beneficios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Casos, haberes medios (en pesos) y monto (en millones de pesos)

	Jubilaciones	Pensiones	Total
<i>Casos</i>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	709	524	1.233
Haberes menores a \$ 3.100 .....	1.031	856	1.887
Total .....	1.740	1.380	3.120
<i>Haberes medios</i>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	5.428,5	4.541,3	5.051,4
Haberes menores a \$ 3.100 .....	2.389,8	1.832,6	2.137,0
Total .....	3.628,0	2.861,1	3.288,8
<i>Monto mensual</i>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	3,8	2,4	6,2
Haberes menores a \$ 3.100 .....	2,5	1,6	4,0
Total .....	6,3	3,9	10,3
<i>Monto anual</i>			
Haberes mayores a \$ 3.100 .....	50,0	30,9	81,0
Haberes menores a \$ 3.100 .....	32,0	20,4	52,4
Total .....	82,1	51,3	133,4

Fuente: Secretaría de Seguridad Social.